

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

(ES-0090)

RESUMEN EJECUTIVO

PRESTATARIO: República de El Salvador

ORGANISMOS EJECUTORES: Entidad Coordinadora y Coejecutora: Unidad Técnica Ejecutora/Comisión Coordinadora del Sector de Justicia (UTE/CCSJ). Entidades Coejecutoras: Organo Judicial, Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Consejo Nacional de la Judicatura e Instituto Salvadoreño para la Protección al Menor.

MONTO Y FUENTE:

BID/OC:	US\$19,2 millones
	US\$ 3,0 millones con FFI
Aporte local:	US\$ 5,1 millones
Total:	US\$27,3 millones

PLAZOS Y CONDICIONES FINANCIERAS:

Plazo de amortización:	25 años
Período de desembolso:	4 años
Tipo de interés:	variable
Período de gracia:	4 años
Inspección y vigilancia:	1%
Comisión de crédito:	0,75%

OBJETIVOS: El objetivo general es contribuir a los esfuerzos de modernización y fortalecimiento del Sistema de Justicia con la finalidad de incrementar la confianza en dicho Sistema, mejorando la seguridad jurídica, el ambiente de seguridad ciudadana y la efectividad de las instituciones del sistema.

DESCRIPCION: El Programa tendrá lo siguientes componentes:

1. Reformas Legales y actividades de capacitación y divulgación jurídica. Este componente, tiene por objetivo apoyar la efectiva vigencia de las importantes reformas legales iniciadas por el Gobierno y respaldar al Ministerio de Justicia y

al Organo Judicial en sus esfuerzos por impulsar nuevas reformas legales en áreas desatendidas, para continuar la modernización jurídica de El Salvador.

2. Mejora del Sistema de Justicia para Menores. Se proveerá al ISPM de la infraestructura adecuada y una organización descentralizada para permitirle tornar más eficientes los programas que está realizando, con el objeto de prevenir y disminuir la delincuencia juvenil y mejorar las condiciones de los menores internos y el ambiente de seguridad ciudadana.
3. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia. Contempla el fortalecimiento de la capacidad de planeamiento, administración e información de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia.

**CLASIFICACION
AMBIENTAL:**

El Comité de Medio Ambiente en la reunión del 24 de enero de 1995 clasificó esta operación en la Categoría II.

**RECONOCIMIENTO
DE GASTOS:**

Se reconocerán gastos previos a la aprobación del préstamo, de conformidad con las disposiciones del Banco, hasta por un monto máximo de US\$200.000 para cubrir gastos efectuados por el GOES para avanzar con la preparación del reglamento operativo y los trámites para la selección del Coordinador General y los 4 coordinadores técnicos (consultores nacionales) para las áreas de reformas legales, menores, planeamiento y sistemas de información (ver p.3.34).

BENEFICIOS:

Como resultado de la ejecución del Programa se tendrá un Sistema de Justicia más eficiente y confiable, una mayor capacidad para enfrentar el grave problema de la delincuencia juvenil y una mejoría del ambiente de seguridad ciudadana.

RIESGOS:

La exitosa implementación del Programa requerirá la participación de entidades del Organo Judicial, el Organo Ejecutivo, y el Ministerio Público (Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República), así como la aprobación de leyes por la Asamblea Legislativa. El enfoque integrado del Programa es crucial para el mejoramiento del sistema de justicia y requiere mantener el consenso y la cooperación entre las varias entidades participantes. Este consenso ha sido demostrado durante la preparación del Programa, por pronunciamientos y acciones tomadas. El riesgo es, por lo tanto, perder

el consenso alcanzado. Este riesgo está atenuado por la sólida experiencia de coordinación que existe entre las instituciones principales del sector desde 1993.

La complejidad de la operación conlleva un riesgo de demoras en su implantación. El mismo se ha mitigado a través del diseño de apropiados mecanismos de coordinación y ejecución. Además las revisiones anuales del Programa permitirán ajustes en su contenido, así como en su mecanismo de ejecución, si fuera necesario. El cumplimiento de una serie de condiciones previas al primer desembolso facilitará un inicio rápido de este programa.

POBREZA:

Casi la totalidad de los menores beneficiarios del Componente "Mejora del Sistema de Justicia para Menores" son pobres. Este Componente representa aproximadamente el 50% del costo total del Programa. El Programa beneficiará por igual a la población de El Salvador ya que se orienta a modernizar el Sistema de Justicia, por lo cual no se considera un Programa focalizado a la reducción de pobreza.

**ESTRATEGIA DEL
BANCO EN EL PAIS
Y EN EL SECTOR:**

El Programa propuesto es compatible con la estrategia del Banco para el país. En el marco de dicha estrategia, el Banco se ha comprometido a apoyar los esfuerzos que el Gobierno está realizando para modernizar el sector público y consolidar las condiciones de estabilidad jurídica y sociopolítica. Además, el Programa que se propone es coherente con el Marco de la Referencia para la Acción del Banco en los Proyectos y Modernización del Estado y Fortalecimiento de la Sociedad Civil que fue sometida recientemente a la consideración del Comité de Políticas del Directorio Ejecutivo.

**CONDICIONES
CONTRACTUALES
ESPECIALES:**

I. Condiciones previas al primer desembolso:

- a. La selección y contratación del Coordinador General (experto internacional) (ver p.3.10).
- b. Un convenio firmado entre el prestatario y la UTE para la transferencia de los recursos de préstamo y de la contrapartida local (ver p.3.2).
- c. La puesta en vigencia del reglamento operativo y la firma de los convenios firmados entre la UTE y las entidades coejecutoras (ver p.3.5).
- d. la reglamentación de la ley orgánica de la UTE (ver p.3.7).

II. Otras condiciones contractuales especiales:

- a. Dentro de los 180 días a partir de la fecha de elegibilidad para desembolsos, la contratación, de una firma o agencia especializada que ayude a la UTE en la selección, contratación y supervisión de consultores individuales, y capacite a dicha unidad para que en los años sucesivos realice estas tareas.(ver p.3.19.b).
- b. Dentro de los 90 días a partir de la fecha de elegibilidad para desembolsos, la contratación de una consultoría para preparar la primera encuesta de opinión para la evaluación de los resultados del Programa (ver p.3.27).
- c. Dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de elegibilidad del préstamo para desembolso, se deberá presentar evidencia de haber contratado el personal técnico adicional previsto para la UTE (ver p.3.11).
- d. Un informe que incluya el grado de cumplimiento de la ejecución del Programa, así como una propuesta detallada del plan de trabajo y del presupuesto para el año de ejecución siguiente, un mes antes de la conclusión de cada año de actividades. La aprobación por el Banco de dicha propuesta será condición previa a los desembolsos para el año siguiente. (ver p.3.22).
- e. Una evaluación de desempeño al final del tercer año de ejecución del Programa. Para estos efectos, la UTE enviará al Banco, un mes antes de la misión de evaluación, un informe indicando el cumplimiento de las metas y los resultados de las actividades medidas de acuerdo con los indicadores de impacto (ver p.3.25).
- f. Un plan operativo para el centro regional integrado (centro piloto) firmado por el Organo Judicial, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República, previo a la licitación de su construcción (ver p.2.23).
- g. La contratación de una firma consultora especializada para elaborar documentos de licitación, supervisar la ejecución de las construcciones y realizar la ingeniería de detalle, previo al inicio de las obras correspondientes (ver p.3.20).
- h. El Contrato de Préstamo incluirá, además, las cláusulas estándares del Banco relativas a, entre otras, auditoría, informes de progreso, inspecciones, evaluación de préstamo y adquisiciones.

I. MARCO DE REFERENCIA

A. Contexto económico, social y político

- 1.1 Luego de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en 1992, el Gobierno de El Salvador se comprometió a la reconstrucción del país. El logro de la paz fue un prerequisite para implantar exitosamente una estrategia de reformas destinadas a alcanzar un crecimiento económico sostenible con desarrollo social. Los principales logros de esta estrategia incluían: (i) el cambio de modelo económico, de una economía altamente intervenida por el Estado a una economía social de mercado; (ii) la estabilización económica; (iii) el establecimiento de las bases necesarias para un desarrollo social sostenido; y (iv) el inicio de un programa de reformas para modernizar el Estado.
- 1.2 Bajo condiciones económicas estables, y en el marco de su estrategia de desarrollo social, el GOES ha considerado prioritarios los programas de alivio a la pobreza, los cuales persiguen como objetivo a largo plazo el establecimiento de una red nacional de seguridad social mínima que garantice a la población -y especialmente a los grupos más vulnerables- el acceso a la prestación de los servicios sociales básicos (educación, salud y saneamiento). Por otra parte, el GOES está emprendiendo esfuerzos importantes para la modernización del sector público, incluyendo reformas estructurales e institucionales, descentralización, privatización, gestión de recursos humanos y servicio civil, y sistemas de administración fiscal y financiera integrada 1/.
- 1.3 Entre los compromisos adoptados dentro de los Acuerdos de Paz, cabe destacar: (i) la desmilitarización del país mediante la transformación y reducción de las Fuerzas Armadas y la desmovilización del FMLN, con su respectiva integración a la sociedad, (ii) la sustitución de la antigua policía, de carácter militar, por una nueva Policía Nacional Civil; (iii) la reforma del Sistema Electoral; y (iv) acuerdos y reformas económicas y sociales, que incluyen entre otros, la creación de un Foro de Concertación Económica y Social y la ejecución de un Plan de Reconstrucción Nacional (PRN).
- 1.4 En lo que se refiere al Sistema de Justicia, los Acuerdos de Paz reflejan un profundo consenso por parte de la sociedad salvadoreña alrededor de la importancia del Sistema de Justicia para la construcción económica y la seguridad pública del país. En base al consenso mencionado, se han realizado importantes reformas constitucionales: la creación de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, para aplicar las nuevas modalidades de designación de los Magistrados de la Corte

1/ Estos esfuerzos están siendo apoyados por el BID (ES-0036) y por el Banco Mundial, a través de una operación de financiamiento conjunto.

Suprema y de los términos de su mandato; así como la reforma del Ministerio Público, con la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Son de particular relevancia los esfuerzos de buscar, por medio de la creación de una Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de su Unidad Técnica Ejecutiva, una efectiva coordinación de las instituciones del sector, así como la cooperación internacional necesaria para concretar las reformas emprendidas. Adicionalmente se han iniciado reformas legislativas importantes, especialmente del Código Penal, Procesal Penal, Familia y Menores.

- 1.5 No obstante lo avanzado, se reconoce que la reforma judicial tiene complejidades particulares, especialmente por estar enmarcada en un proceso de reconciliación nacional, y teniendo como retos la necesidad de enfrentar la impunidad y fortalecer la paz y la democracia. Hay todavía desafíos que superar en cada una de las instituciones del Sistema de Justicia, lo que implica nuevos requerimientos de cooperación internacional y nacional, dado que todas las instituciones del sector deben trabajar en forma aunada para mejorar la confianza del público.

B. Estrategia y papel de la asistencia del Banco

- 1.6 Los objetivos de la estrategia del Banco para El Salvador, definidos en el Documento de Programación, consisten en: (i) mejorar la infraestructura social y económica, en las regiones más rezagadas y en especial en aquellas afectadas por el conflicto bélico; (ii) apoyar el sostenimiento de las reformas económicas, la profundización del clima de inversiones, y la consolidación de una estrategia de exportaciones; (iii) apoyar la atención integral a las necesidades sociales básicas de educación y salud, el mejoramiento del desarrollo ambiental, y la participación activa de la mujer en el proceso de reconstrucción del país; (iv) apoyar la modernización del sector público y la formación de recursos humanos atendiendo las necesidades del mercado laboral; y (v) fortalecer los mecanismos de gobierno que aseguren la participación activa de las comunidades a nivel de los gobiernos locales.
- 1.7 En el marco de dicha estrategia, el Banco se ha comprometido a apoyar los esfuerzos que el GOES está realizando para modernizar el sector público y desempeñar un papel preponderante en el programa de modernización de dicho sector. Asimismo, el Programa que se propone es coherente con El Marco de Referencia para la Acción del Banco en los Proyectos de Modernización del Estado y Fortalecimiento de la Sociedad Civil sometido recientemente a la consideración del Directorio Ejecutivo del Banco.

C. Experiencias de las Instituciones del Sistema de Justicia en programas de reformas judiciales

- 1.8 Reformas apoyadas por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID). Con el apoyo de la AID, el GOES inició a principios de los años 80 algunos pequeños programas

orientados al fortalecimiento del sistema de justicia. A principios de 1984 es que se inician, con el apoyo de la misma Agencia, dos proyectos de mayor envergadura: el Proyecto de Reforma Judicial I iniciado a principios de 1984 y el de Reforma Judicial II que se inició en marzo de 1993.

- 1.9 El Proyecto de Reforma Judicial I fue iniciado con un presupuesto de aproximadamente US\$10,0 millones, y concluido en junio de 1993. Este proyecto fue continuado con el de Reforma II que se inició en marzo 1993, bajo la dirección de una Comisión Coordinadora para el Sector de Justicia (CCSJ) ^{2/} y de una Unidad Técnica Ejecutora (UTE), creadas para facilitar su ejecución. Este último proyecto incluye la suma de US\$15,0 millones y estará concluido en septiembre de 1997.
- 1.10 Dentro del marco de los Proyectos de Reforma y con base en las reformas constitucionales de 1992, los principales logros alcanzados se indican a continuación: (i) se elaboraron y aprobaron nuevos códigos y leyes (Código de Familia, Ley Procesal de Familia y Ley del Menor Infractor); (ii) se han redactado y presentado a la Asamblea Legislativa proyectos de códigos o de leyes en materia penal (Código Penal, Código Procesal Penal y Ley Penitenciaria y un Proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos); (iii) se elaboraron reformas al Código de Procedimientos Civiles y de otras leyes orgánicas de las instituciones del Sector de Justicia (Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, etc.), así como el Plan Quinquenal para el Sector de Justicia 1992-1996 (primer esfuerzo unificado de las instituciones del Sector); (iv) se llevaron a cabo actividades en materia de divulgación de normativas y de capacitación, habiéndose asimismo procedido a la creación de nuevos tribunales; (v) se hicieron revisiones de planes de estudios para la carrera de Derecho y campañas de educación legal popular; (vi) se ha ejecutado un proyecto piloto de análisis de sistemas administrativos y de seguimiento estadístico en diez juzgados penales; y (vii) se capacitaron grupos interinstitucionales en materia de planeación (Ministerio de Justicia, Corte Suprema, P.G.R., F.G.R y C.N.J para mejorar el sistema de información y coordinación.
- 1.11 Además, el país adoptó una Política Nacional de Atención al Menor y se creó el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM) para encarar la problemática del menor en forma integral.
- 1.12 Programas apoyados por otros donantes. El PNUD ha apoyado un proyecto para la divulgación del nuevo ordenamiento jurídico penal, sobre todo a los diputados de la Asamblea Legislativa y las asociaciones de abogados. Además está apoyando en materia de capacitación un programa para fiscales en técnicas de investigación del delito y para defensores públicos y jueces de paz en derechos

^{2/} La CCSJ estaba integrada por el Presidente de la Corte Suprema, el Procurador General, el Fiscal General y el Ministro de Justicia.

humanos. Otro programa del PNUD tiene el objetivo de realizar un diagnóstico de la Escuela de Capacitación Judicial.

- 1.13 En el área de menores, la UNICEF inició en 1993 un proyecto dirigido a mejorar la condición de los menores que se encuentran en circunstancias especialmente difíciles. La Cooperación Italiana, a su vez, ha prestado asistencia al ISPM a través de su subprograma Socio-Sanitario.
- 1.14 El Banco Mundial está financiando un proceso para rehacer el catastro de las tierras en el país y está considerando financiar la modernización del Registro de Comercio (ambos registros, administrados por el Ministerio de Justicia); asimismo está prestando asistencia técnica al Banco Central para la modernización de sus procesos administrativos y la revisión de la legislación financiera del país, actualmente cubierta por el Código de Comercio. Para el funcionamiento y desarrollo de la gestión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, diversos donantes bilaterales y agencias del Sistema de Naciones Unidas, particularmente ONUSAL, PNUD y UNICEF, han brindado asistencia técnica y financiera.

D. Lecciones aprendidas de experiencias previas

- 1.15 Las experiencias mencionadas anteriormente, tanto en los proyectos de reforma judicial apoyados por la AID como por otros organismos, indican que la coordinación sectorial fue un factor clave para el éxito de los proyectos iniciados en el sector. La creación de una Comisión Coordinadora, formada por instituciones del Sector de Justicia y el establecimiento de una Unidad Técnica Ejecutora responsable de implementar y supervisar las actividades, constituyeron la base fundamental para la buena ejecución de las operaciones pasadas. Consecuentemente, estas instituciones serán integradas como componentes esenciales del Programa que se propone.
- 1.16 No sólo los logros son importantes, también las dificultades y deficiencias institucionales encontradas en la ejecución de los proyectos iniciados, son elementos que servirán de base para las medidas de corrección y ajustes que podrán introducirse en el Programa propuesto. La ejecución de los proyectos financiados por la AID constituyeron el primer y más importante programa de asistencia internacional en el sector de justicia. Por tal motivo, esta operación necesitó el apoyo de una firma consultora internacional para administrar en forma coordinada con la UTE y con las instituciones del sector, gran parte de los componentes. Si bien este procedimiento fue exitoso para la ejecución del proyecto, no se alcanzó toda la transferencia de experiencia deseable en materia de planeamiento y ejecución de proyectos. Los problemas con que todavía se enfrentan las instituciones del Sistema de Justicia son significativos y variados y se presentan en diversos planos: organizativo (planeamiento y coordinación), administrativo (gestión, estructura organizacional), normativo (leyes y

legislación interna), y técnico (sistemas de estadísticas, registro y control, deficiencias de infraestructura).

E. Áreas identificadas como prioritarias para la asistencia del Banco

- 1.17 El Salvador desea modernizar y fortalecer el sistema de justicia, incrementando la seguridad jurídica, el ambiente de seguridad ciudadana y la confianza del público en dicho Sistema. Dentro de este contexto, se han identificado tres áreas prioritarias de acción: consolidación y ampliación de las reformas legales en curso; colaboración con las instituciones del sistema judicial para ayudarlas a aplicar enfoques innovadores con respecto a la delincuencia juvenil; y el fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión de las instituciones del sistema judicial.
- 1.18 El país ha logrado avances en el campo de la modernización del Derecho que deben consolidarse y ampliarse a otras áreas de importancia para el desarrollo socioeconómico del país. Se requiere realizar actividades de capacitación y difusión de la nueva legislación penal elaborada con el apoyo de la AID, a fin de permitir su aplicación práctica. En adición, se han identificado tres áreas prioritarias para la continuación de la reforma de legislación: derecho mercantil, derecho administrativo, y legislación relacionada con la solución alternativa de controversias.
- 1.19 La normativa en el campo mercantil se considera desactualizada, en lo referente a las tendencias internacionales (globalización, apertura de mercados, descentralización, privatización, nuevos esquemas de contratos, procesos de integración económica, etc.). La normativa en el área administrativa adolece asimismo de graves defectos: la mayoría de las instituciones de la Administración Pública carece de un reglamento interno que regule sus actividades y, en cuanto a la estructuración de los recursos administrativos, no hay unanimidad acerca de los grados e instancias ante los cuales el administrado puede recurrir para reclamar sus derechos legales o constitucionales. La única instancia judicial disponible para conocer las causas de lo contencioso administrativo es una sala de la Corte Suprema. Finalmente, la legislación que contempla solución de controversias por medio de arbitraje, mediación o conciliación requiere actualización. Estos mecanismos alternos son utilizados limitadamente y el personal que los aplica carece de capacitación.
- 1.20 La segunda área de acción prioritaria es está relacionada con la delincuencia juvenil, que tiene un impacto importante en la seguridad ciudadana y, como resultado, en la confianza del público en el sistema judicial. Las estadísticas sociales muestran un aumento notable de este fenómeno (el crecimiento del número de pandillas juveniles, conocidas como "maras", es significativo), y las encuestas de opinión —la más reciente de las cuales es de junio de 1995— señalan la violencia y el crimen como uno de los problemas más importante del país (el primero, si a los factores indicados se

suma el tema de las drogas) 3/. Una combinación de la aplicación de las reformas legales (Ley del Menor Infractor) y las inversiones en la rehabilitación de centros de internamiento y programas de educación técnica es requerida para enfrentar el problema de la delincuencia juvenil dentro de un marco legal adecuado y moderno. Los esfuerzos para recuperar al delincuente y reintegrarlo a la sociedad civil, asociados a la aplicación de los nuevos códigos Penal y Procesal Penal que tienen implicaciones importantes sobre el tema de la delincuencia en general, representarían instrumentos válidos para contribuir a la seguridad ciudadana.

- 1.21 La tercera área prioritaria es la de fortalecimiento institucional, especialmente en las áreas de planeamiento, gestión e información: formulación de políticas sectoriales, civiles y criminales, mejoramiento de estructuras organizacionales y métodos de gestión, elaboración de sistemas de información y la aplicación de nuevos criterios orientados a la cooperación interinstitucional. La cantidad y variedad de desafíos que el sector debe encarar, el hecho de que muchos de ellos sólo pueden ser resueltos mediante acciones y estrategias de mediano y largo plazo, y la certeza de que en la medida en que el Sistema de Justicia se adapte a los cambios sociales pueden surgir nuevos problemas, justifican que una de las principales prioridades del sector sea desarrollar la capacidad de una planificación estratégica coordinada y sistemática. 4/ Por otra parte, con la excepción del Órgano Judicial, las instituciones del sector carecen de unidades de informática debidamente establecidas y con recursos apropiados para acumular y procesar los cuantiosos volúmenes de información esenciales para el cumplimiento de su misión.

3/ Encuesta de CID/Gallup de Centroamérica: Opinión Pública, El Salvador, No. 23, junio, 1995. La problemática de la delincuencia juvenil es compleja y afectada por una serie de factores: el 47% de la población está constituida por menores de 18 años; durante la década pasada, se produjo una migración interna de más de medio millón de personas, el 50% de las cuales pertenecían a este grupo de edad, mientras que aproximadamente 4.000 de ellos perdieron en la guerra a uno u otro de sus padres; además, en el transcurso de este período, más de 750.000 ciudadanos abandonaron el país, dejando a sus hijos al cuidado de parientes.

4/ Con la excepción del ISPM, todas las entidades beneficiarias del Programa cuentan con unidades de planificación, la mayoría de ellas creadas recientemente en el marco del Proyecto Reforma Judicial II, en general, están casi exclusivamente encargadas de la elaboración y seguimiento del presupuesto y presentan importantes debilidades.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos, propósitos e instituciones involucradas y beneficiadas

- 2.1 El objetivo general del Programa es contribuir a los esfuerzos del país en el proceso de modernización del Sistema de Justicia con la finalidad de incrementar la confianza en dicho sistema, mejorando la seguridad jurídica, el ambiente de seguridad ciudadana y la efectividad de las instituciones del Sistema de Justicia.
- 2.2 El Programa tendrá los siguientes propósitos: (i) respaldar la implementación de las reformas legales iniciadas por el Gobierno e impulsar nuevas iniciativas en áreas desatendidas; (ii) fortalecer la capacidad del Sistema de Justicia y del ISPM para enfrentar la problemática de menores infractores y en situación de riesgo, contribuyendo a la seguridad pública y a la reinserción social de estos menores; y (iii) apoyar el fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia mediante el desarrollo de un sistema de planeamiento integral, un sistema de información, y de nuevas formas de cooperación interinstitucional.
- 2.3 Seis instituciones públicas actuarán en el ámbito del Programa para cumplir con sus objetivos: el Poder Judicial que se denomina "Organo Judicial", el Ministerio de Justicia, la FGR, la PGR, el CNJ y el ISPM. También participará la Policía Nacional Civil, a través de los programas de capacitación en el área de menores, o sea el papel de la policía en el trato adecuado de los menores, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En los anexos de la operación se describen someramente las funciones de cada una de estas instituciones.

B. Componentes

- 2.4 El Programa está conformado por los siguientes componentes (en los Anexos I, II y III se presentan con mayor detalle las actividades específicas y los indicadores de cada componente):
 1. Primer componente: Reformas Legales y actividades de capacitación y divulgación jurídica (US\$960 mil)
- 2.5 Este componente respaldará las reformas legales iniciadas por el Gobierno y apoyará sobre todo al Ministerio de Justicia y al Organo Judicial en sus esfuerzos de impulsar nuevas iniciativas en áreas desatendidas, comprende los subcomponentes que se indican a continuación.

- 2.6 Apoyo a la implementación de las reformas penales en curso (US\$240 mil). Contemplará la elaboración y ejecución de un plan de capacitación en materia penal para abogados -en especial, abogados litigantes-, que no fueron consideradas en el Programa Reforma Judicial II. El programa de capacitación será ofrecido por la Escuela de Capacitación Judicial que es administrada por el Consejo Nacional de Judicatura. Se incluirá también financiamiento al Ministerio de Justicia para cubrir los costos de la divulgación de la nueva legislación penal y de una edición anotada, concordada y comentada de la Ley del Menor Infractor, así como el desarrollo de campañas educativas destinadas a informar a la población sobre sus derechos y responsabilidades en el marco de la nueva normativa.
- 2.7 Legislación en el área mercantil. Paralelamente al presente Programa, se está preparando otro a ser presentado al Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), por ser consistente con su objetivo de "financiar servicios de asesoría... los que podrán incluir asesoría respecto de la reforma legislativa en materia de inversiones (y) ...comercial... así como asesoría en la implementación de dicha legislación." 5/, el cual incorporará un análisis integral del área mercantil que contemple tanto sus aspectos legales como económicos. Tanto el diagnóstico como la siguiente elaboración de anteproyectos de legislación mercantil serán ejecutados con una plena participación del sector privado. (por ejemplo, FUSADES, y la Cámara de Comercio). Se prevé también la divulgación de la legislación aprobada y el diseño de programas de capacitación sobre la nueva legislación mercantil.
- 2.8 Legislación en el área administrativa (US\$520 mil). Se apoyará al Ministerio de Justicia en la revisión del Proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos y conjuntamente con el Organo Judicial, de la Ley de la Jurisdicción del Contencioso Administrativo, contemplándose la posible ampliación de esta última a materias no incorporadas a la misma (sobre todo en las áreas tributaria y de adquisición de bienes). En el caso de ambas leyes, se financiará la asistencia técnica a la Asamblea Legislativa para facilitar su promulgación, la divulgación de la legislación aprobada, y programas de capacitación sobre la nueva normativa. Con la finalidad de instituir una jurisdicción completa de lo contencioso administrativo, actualmente limitada a la Corte Suprema, se financiará además, como experiencia piloto, el diseño de 3 Juzgados Regionales de Primera Instancia en el ámbito de lo contencioso administrativo. En esta experiencia piloto, el Banco financiará la asistencia técnica y el Organo Judicial financiará con recursos propios los otros costos.
- 2.9 Legislación sobre métodos alternos de solución de controversias (US\$200 mil). Se financiará el desarrollo y la ejecución de programas de capacitación en técnicas de conciliación para jueces de familia y de menores, para el personal competente del ISPM, para

5/ Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, Artículo III, Sección 2, párrafo (c).

y para estudiantes de derecho, en un proyecto piloto de esta materia en una Facultad de Derecho. Este subcomponente será complementado en materia comercial por un proyecto que se está preparando para ser financiado con recursos del FOMIN, con la participación de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. El proyecto FOMIN tendrá por objetivo agilizar la solución de controversias comerciales a través de mecanismos de arbitraje y conciliación y se incluirá reforma de la legislación en el campo, apoyo a un centro de arbitraje y capacitación del sector privado, de jueces de paz y jueces laboral en técnicas de arbitraje y conciliación.

2. Segundo Componente: Mejora del Sistema de Justicia para Menores
(US\$8,8 millones)

- 2.10 Este componente está dirigido a proveer al ISPM de la infraestructura necesaria y una organización descentralizada para permitirle tornar más eficientes los programas que dicho instituto está realizando, con el objeto de prevenir la delincuencia juvenil y mejorar las condiciones de los menores internos. En especial, este componente está dirigido a fomentar programas innovadores e impulsar nuevas formas de prevención y tratamiento de la delincuencia juvenil por el Sistema de Justicia, de acuerdo con las reformas iniciadas en el sector. Este componente está conformado por los subcomponentes indicados a continuación:
- 2.11 Rehabilitación de la infraestructura de los centros de menores existentes (US\$1,0 millones). El ISPM tiene bajo su responsabilidad la administración de los centros de internamiento de menores, cuyo diseño no corresponde a las necesidades o requisitos actuales. El Programa contempla la remodelación de los centros de El Espino, Rosa Virgina Pelletier y Centro Reeducativo de Menores de Tonacatepeque. Para estos efectos, se cuenta con los diseños arquitectónicos preliminares y por lo tanto con una estimación de sus costos 6/.
- 2.12 Establecimiento de 3 delegaciones regionales del ISPM y construcción de 3 centros de resguardo (US\$2,5 millones). Con la finalidad de favorecer la descentralización del ISPM y conseguir así un mejor acceso y una mejor calidad de los servicios ofrecidos por este organismo, se financiará la construcción de delegaciones regionales del ISPM en una zona marginal de San Salvador, en Santa Ana y en San Miguel. Asimismo se contempla la construcción de centros de resguardo en cada una de estas delegaciones financiándose igualmente la adquisición de equipo de comunicaciones y transporte. Los centros de resguardo son requeridos por la nueva Ley del Menor Infractor, que recoge la vigente normativa internacional (Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas) y las tendencias modernas del derecho de menores.

6/ Estos centros actualmente concentran aproximadamente 1.100 niños, de los cuales aproximadamente 200 son niñas. Esta población está comprendida entre 12 y 18 años de edad.

La ley especifica que cuando un menor es privado de su libertad por orden judicial, el juez "ordenará el resguardo del menor para que se le practique un diagnóstico preliminar por especialistas y dentro de las 72 horas lo remitirá al Juez" (Art. 53, Ley del Menor Infractor). Actualmente, en la ausencia de los centros de resguardo, los menores están siendo alojados en condiciones severamente inadecuadas durante el periodo del diagnóstico preliminar. Se constituye un avance importante en la protección de los derechos del menor en El Salvador, que los centros de resguardo serán administrados no por el sistema penitenciario ni por la policía, sino por el ISPM. Se dispone de los diseños arquitectónicos preliminares de las referidas instalaciones. Se dispone de los diseños arquitectónicos preliminares de las referidas instalaciones.

2.13 Fortalecimiento de los programas de prevención y reinserción social (US\$1,4 millones). Se apoyará al ISPM en programas innovadores que favorezcan la reinserción social de niños y jóvenes menores de 18 años y les eviten enfrentar circunstancias que supongan amenazas o violaciones de sus derechos. Este subcomponente contemplará las siguientes acciones:

- a. Para menores en riesgo social en proceso de reeducación y para jóvenes internos en proceso de liberación (US\$800 mil). Se busca estimular la cooperación inter-institucional en programas de prevención y reinserción, financiando los costos de becas para capacitación en materias tales como mecánica automotriz, reparación de máquinas industriales y otras. Las becas cubrirán talleres, uniformes y transporte. La capacitación será ofrecida por el Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) y por otras instituciones similares, como la Fundación Don Bosco de los Salesianos que cuenta con gran experiencia en este campo. Esta actividad será coordinada por el ISPM con las entidades que proporcionarían este tipo de capacitación. Dentro de este subcomponente, se financiará aproximadamente 1.750 becas de 3 meses en las materias mencionadas anteriormente para menores en riesgo social; y la expansión de 30 a 150 personas de un pequeño programa del ISPM para facilitar la última etapa de reinserción en la comunidad de jóvenes internos en proceso de liberación. Durante el periodo de transición, estos jóvenes asistirán a cursos de capacitación impartidos por organizaciones no gubernamentales.
- b. Para miembros de pandillas juveniles (maras) (US\$540 mil). Se apoyará al ISPM en desarrollar programas orientados a disminuir la problemática de las pandillas de delincuentes juveniles (violencia, drogadicción y delincuencia). Se financiarán programas de capacitación laboral y educación social destinados a favorecer la separación de tales jóvenes de estos grupos y su incorporación a la sociedad. Para la ejecución de estas actividades, se utilizarán ONGs que ya están trabajando en esta materia, con los gobiernos locales y grupos comunitarios.

- c. Para la comunidad (US\$60 mil). Se financiará la capacitación de promotores, para ofrecer cursos sobre la problemática de los menores y el papel de la comunidad en su solución a los gobiernos locales, organismos comunales, madres cuidadoras y miembros de maras, así como la adquisición del material didáctico necesario para este fin. El ISPM coordinará este programa con ONGs, gobiernos locales y grupos comunitarios.
- 2.14 Apoyo a los programas de atención institucionalizada (US\$2,8 millones). Se apoyará un nuevo enfoque en las siguientes actividades que viene desarrollando el ISPM:
- a. Desintoxicación de internos (US\$500 mil). Se estima que un alto porcentaje de los menores que ingresan en los centros de reclusión son adictos a drogas y/o alcohol. El sistema de menores carece de centros especializados para el tratamiento de este tipo de población. Este subcomponente apoyará la realización de un diagnóstico para determinar el nivel de consumo de droga de la población reclusa. Con base en el mismo, el ISPM diseñará un programa de prevención y tratamiento. Como parte de este esfuerzo, se apoyará el establecimiento de 4 clínicas de desintoxicación en los centros de atención existentes. El financiamiento se utilizará para el diagnóstico, la capacitación, la adecuación de la infraestructura de los centros y compras de equipamiento y medicamentos.
 - b. Diversificación y equipamiento de talleres de formación y producción (US\$2,1 millones). El propósito de esta actividad es permitir la modernización del programa de capacitación técnico-vocacional para ofrecer a los menores internos una formación dirigida más al mercado laboral técnico que al artesanal. Este subprograma apoyará al ISPM en la construcción de 5 pequeños centros de capacitación técnica y la remodelación de 4 talleres en los centros de rehabilitación que se encuentran bajo la administración de dicho instituto. Se ofrecerá apoyo técnico para permitir la ejecución de programas de capacitación en diversas áreas técnicas (mecánica automotriz, cómputo, electricidad y electrónica, costura industrial y soldadura eléctrico-autógena).
 - c. Fortalecimiento de programas para prevenir y reducir la violencia familiar (US\$200 mil). Se apoyará al ISPM en la creación de un refugio temporal en San Salvador que ofrezca albergue a las víctimas de violencia familiar que, por la naturaleza del caso, no pueden ser reinsertadas en su familia en forma inmediata, y la adquisición de equipos de comunicación y transporte para facilitar el desplazamiento de tales víctimas a sitios donde se les pueda brindar la atención requerida. Asimismo se financiará la capacitación y formación de nuevos equipos multidisciplinarios para el tratamiento de dichas víctimas.

- 2.15 Establecimiento de un fondo especial para apoyar iniciativas innovadoras de ONGs (US\$500 mil). Se fomentarán iniciativas innovadoras procedentes de ONGs, en este campo, por medio de un programa de donaciones "seed money" que faciliten su comienzo. Estas donaciones no podrán exceder el equivalente de US\$25 mil por proyecto, con financiamiento de hasta un año. Además, los fondos previstos no podrán ser utilizados para la subvención de gastos de operación de programas existentes. Estos fondos serán otorgados por la UTE, en coordinación con el ISPM, a través de concursos adecuadamente anunciados y regulados. Se estima otorgar 20 donaciones durante el curso de la ejecución del Programa.
- 2.16 Establecimiento de un programa de capacitación para los operadores del sistema de justicia para menores (US\$650 mil). Se apoyará al ISPM y al Consejo Nacional de Judicatura en la realización de un programa de capacitación y educación continuada en la aplicación de la nueva ley del Menor Infractor, para todo el personal del Sistema de Justicia y del ISPM, responsables para la aplicación de la nueva legislación. Asimismo, se establecerán cursos para capacitadores, que se impartirán in situ y servirán como apoyo técnico y seguimiento a los cursos anteriormente mencionados. Se espera capacitar a unos 4.000 operadores durante el plazo de ejecución del Programa.
- 2.17 El Programa incluirá capacitación de Magistrados, Jueces de Primera Instancia, Jueces de Paz, Fiscales y Procuradores de Menores, Procuradores de Ejecución de Medidas, y Procuradores de Derechos Humanos; capacitación para los equipos multidisciplinarios del Organo Judicial, establecidos por la nueva legislación para desarrollar programas de evaluación y prevención y trabajar en la aplicación de la ley en los Juzgados de Menores y de Ejecución de Medidas; para los Colaboradores Jurídicos y Secretarios de Despacho de los Juzgados de Menores, de Ejecución de Medidas, de Primera Instancia, de Paz y de Menores; para el personal de la Policía Nacional Civil, y profesores de la Academia Nacional de Seguridad Pública, en la aplicación de la nueva Ley; y para el personal del ISPM (División de Atención Institucionalizada y División de Prevención).
3. Tercer Componente: Fortalecimiento de las instituciones co-ejecutoras en materia de planeamiento y sistemas de información (US\$6,5 millones).
- 2.18 Este componente fortalecerá la función de planeamiento de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia y de sus sistemas de información y gestión. Está compuesto por los subcomponentes que se indican a continuación:
- 2.19 Fortalecimiento de las unidades de planificación en las instituciones del Sistema de Justicia y del ISPM (US\$1,8 millones). Comprende el financiamiento de asistencia técnica para: (i) la elaboración de sistemas de estadística e indicadores de gestión; (ii) la implementación de las funciones de investigación y

desarrollo como actividades permanentes; (iii) el establecimiento de técnicas de planeamiento y programación; (iv) el fortalecimiento de los sistemas de planificación financiera y el seguimiento de la ejecución presupuestaria; (v) el mejoramiento de los sistemas de administración de recursos humanos; y (vi) el diseño y ejecución de programas de capacitación destinados al personal directivo y técnico con la finalidad de resaltar la importancia del planeamiento de corto y largo plazo en la gestión de las instituciones.

- 2.20 Para todas las unidades de planificación se financiará la adquisición del equipo adecuado. También se financiará la contratación de personal profesional, por un período de un año para integrar los departamentos de planificación de la Fiscalía General, de reciente creación, del Ministerio de Justicia, dado el liderazgo que la ley le otorga en la formulación de políticas para el Sector de Justicia, así como del ISPM, que actualmente no cuenta con un departamento de esta naturaleza.
- 2.21 Desarrollo de una política criminal integral (US\$230 mil). El diseño y desarrollo de una política criminal integral forma parte de las perspectivas de planeamiento integral a que se refiere este componente, y es un paso importante en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En este campo, no existe en el país ninguna verdadera política criminal integral, ni mecanismos e instrumentos eficaces destinados a captar y analizar el fenómeno de la delincuencia. El propósito de este subcomponente es apoyar al Ministerio de Justicia en el diseño de una política criminal integral que permita una intervención frente a la delincuencia más eficaz y respetuosa de los derechos de los ciudadanos. Se pretende alcanzar este objetivo mediante un análisis de la situación actual y el diseño de un plan de política criminal integral y la elaboración y ejecución de un programa de capacitación para los funcionarios de las instituciones en lo penal involucradas.
- 2.22 Tampoco existe en el país una política en materia penitenciaria. Por ello, este subcomponente apoyará la actualización de varios estudios de diagnóstico penitenciario, la discusión y divulgación de sus resultados y la determinación de necesidades, prioridades y perspectivas de acción en el sector.
- 2.23 Desarrollo de 1 centro regional integrado de justicia (US\$870 mil). Consecuentemente con los objetivos ya señalados de integridad del sector y con la finalidad de poner en práctica, a título piloto, de un modelo de planeamiento sectorial y coordinación interinstitucional, el Programa apoyará al Órgano Judicial, a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría General de la República para desarrollar centros regionales integrales de justicia que ofrezcan espacio físico para jueces, procuradores y fiscales. Este subcomponente financiará la construcción de un centro piloto, equipos y la evaluación de su funcionamiento y el diseño de ajustes al mismo. Una condición previa a la licitación

del centro piloto será la aprobación de un plan operativo para el centro firmado por las 3 instituciones involucradas.

- 2.24 Desarrollo de sistemas de información en las instituciones del Sistema de Justicia (US\$3,6 millones). Su objetivo general consiste en mejorar sustancialmente el funcionamiento de los principales organismos que conforman el sistema de justicia de El Salvador por medio de la sistematización y tecnificación de la información que manejan para el desempeño de sus funciones. Específicamente el componente procurará conseguir la modernización de la gestión institucional y la automatización de la información que se utiliza para incrementar la calidad, confiabilidad, accesibilidad, disponibilidad y uso de dicha información, además de garantizar su preservación y seguridad.
- 2.25 Se incluyen acciones destinadas a la formulación de una política de informática para el Sistema de Justicia y el ISPM que asegure el mejor empleo de la misma y facilite la comunicación entre los organismos del sector. Con esta finalidad, se realizará un diagnóstico de la situación actual en términos de procesos y necesidades de información; se formulará un plan de acción para solventar deficiencias detectadas; se realizará un ordenamiento de la información en cada organización, tomando en cuenta las implicaciones legales que puedan resultar de posibles nuevas formas de utilización de la información; y se fortalecerá la capacidad institucional en informática para asegurar la continuidad y sostenibilidad de alcances del Programa. Con esta finalidad, la realización del diagnóstico mencionado será condición previa a la adquisición del equipamiento señalado en el mismo.
- 2.26 Este subcomponente resultará en la reorganización y fortalecimiento de las unidades de informática de las instituciones del Sistema de Justicia y del ISPM, la formulación de políticas de informática y en la implementación de sistemas de información, en la instalación de infraestructura de computo, bases de datos y comunicación y finalmente, en la capacitación de personal de informática y personal usuario. Se financiarán los servicios de firmas consultoras para apoyar las instituciones en el diseño e implementación de los sistemas.
4. Supervisión de obras y agencia especializada (US\$510 mil)
- 2.27 Adicionalmente a los costos directamente imputables a los componentes antes comentados, se han previsto US\$210 mil para supervisión de las obras civiles del Programa y US\$300 mil para contratar una firma especializada para la identificación y selección de consultores.

C. Costo y financiamiento

- 2.28 Costo. El costo total del Programa se ha estimado en el equivalente de US\$27,3 millones, de los cuales US\$22,2 millones serán financiados con recursos del capital ordinario y US\$5,1 millones con aporte local. Para el Componente 2. "Mejoras del Sistema de Justicia para Menores", se propone usar los recursos de la FFI para sufragar hasta 5 puntos porcentuales de la tasa de interés sobre US\$3 millones que se financiaría con recursos del Capital Ordinario, considerando que: (i) El Salvador es elegible para usar la FFI en virtud del Octavo Aumento General de los Recursos del Banco (Documentos AB-1704 y FN 263-8); (ii) El Salvador está llevando a cabo un proceso de pacificación después de un conflicto armado que devastó al país durante más de 10 años; (iii) la mayoría de los beneficiarios del componente de "Menores", según las condiciones imperantes en el país son pobres; y (iv) el componente mencionado fomenta la reinserción de menores delincuentes en la sociedad civil.
- 2.29 Financiamiento. Los términos y condiciones del financiamiento del Banco serían los siguientes: Monto: US\$22,2 millones; Plazos: desembolsos 4 años; Período de Gracia: 4 años; Amortización: 25 años; Tipo de Interés: variable; Comisión de Crédito: 0,75% anual sobre el saldo no desembolsado; y Inspección y Vigilancia: 1% del monto del préstamo.

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA Y SU FINANCIAMIENTO (miles de US\$)					
	BID/OC	BID/FF I	LOCAL	TOTAL	%
1. Administ. y Eval.	1.300		800	2.100	7,7
1.1 Administración	1.200		800	2.000	7,4
1.2 Evaluación	100			100	0,3
2. Costos Directos	11.330	3.000	2.470	16.800	61,4
2.1 Obras y Equipos	3.520	2.000	1.170	6.690	25,3
2.1.3 Supervisión	170	0	40	210	0,8
2.2 Reformas	860	0	100	960	3,2
2.3 Menores	1.600	1.000	400	3.000	10,9
2.4 Fort. de la Planificación	4.880	0	760	5.640	20,3
2.5 Agen. Especializada	300			300	1,1
Subtotal	12.630	3.000	3.270	18.900	68,7
3. Costos Recurrentes	0	0	1.620	1.620	5,9
Subtotal	12.630	3.000	4.890	20.520	75,1
4. Sin Asign. Espec.	2.800			2.800	10,3
5. Costos Financieros	3.770		210	3.980	14,7
5.1 Intereses	3.548			3.548	13,2
5.2 Comisión de Crédito			210	210	0,8
5.3 F.I.V	222			222	0,8
TOTALES	19.200	3.000	5.100	27.300	100,0
Porcentajes	70,0	11,0	19,0	100,0	

- 2.30 Aporte Local. La contraparte local se ha estimado en el equivalente de US\$5,1 millones (el 19% del total). Los montos correspondientes por este concepto a la UTE y a las entidades coejecutoras, serán previstos anualmente en el Presupuesto de la Nación.
- 2.31 Composición de costos por categorías de inversión. Administración y supervisión (US\$2,1 millones). El monto señalado se distribuye de la siguiente manera: (i) US\$1,1 millones para el personal de la Unidad Coordinación del Programa; (ii) US\$100 mil para el personal de apoyo a las unidades ejecutoras; (iii) US\$400 mil para Servicios Externos de apoyo a la ejecución (encuestas anuales del Programa, auditoría externa, fortalecimiento de la UTE y Consultorías); (iv) US\$100 mil para materiales, equipos de oficinas y un vehículo; (v) US\$300 mil para gastos de administración, de difusión, eventuales indemnizaciones de personal, gastos de instalación y traslado del coordinador internacional y otros gastos menores; y (vi) US\$100 mil para la evaluación intermedia del Programa.
- 2.32 Costos directos (US\$16,80 millones). El monto asignado a esta categoría representa el 61% del costo del Programa y se distribuye de la siguiente forma (estos costos están detallados en la documentación de los archivos técnicos correspondientes).

COSTOS DIRECTOS POR COMPONENTE (Numeral 2 del Cuadro Anterior)				
(En miles de US\$) 7/				
	BID/OC/FFI	LOCAL	TOTAL	%
A. Reformas legales	860	100	960	5,9
B. Sistema de justicia para menores	7.300	1.580	8.880	52,8
C. Fortalec. en planeamiento y sist.de información	5.700	760	6.460	38,4
D. Supervisión de Obras y Agencia especializada	470	30	500	2,9
Total Costos Directos	14.330	2.470	16.800	100,0

- 2.33 En lo que se refiere a los costos de construcción y rehabilitación, se incluyó un 5% para la elaboración de los diseños finales.
- 2.34 Costos recurrentes (US\$1,6 millones). Estos costos se estimaron por aumentos netos del número de personal, incrementos salariales, mantenimiento de equipos y de las obras de infraestructura nuevas y rehabilitadas. El componente de menores originaría costos recurrentes por US\$1,1 millones, principalmente en el ISPM, y los US\$500 mil restantes se originan principalmente por el componente de fortalecimiento institucional y se distribuyen entre las entidades coejecutoras.

7/ Los detalles se encuentran en los archivos de la operación.

- 2.35 Sin asignación específica (US\$2,8 millones). Los imprevistos de US\$2,0 millones se estimaron para todos los componentes del Programa y equivalen al 10% del total de los montos correspondientes a las inversiones del Programa, incluyendo el costo de la Unidad Ejecutora. El escalamiento de US\$800 mil, se determinó sobre el costo de las obras civiles, y de las demás actividades del Programa y de los costos recurrentes. La metodología utilizada comprendió la establecida por el Banco para los efectos y se aplicaron las tasas de cambio y de inflación contenidas en las proyecciones realizadas para el Salvador.
- 2.36 Costos Financieros (US\$3,9 millones). Los costos financieros se calcularon de acuerdo a las condiciones del financiamiento establecidas para el período de ejecución del Programa.

D. Información técnica del Programa

- 2.37 La descripción detallada de los componentes por institución, plan de trabajo tentativo para el plazo de ejecución y los mecanismos y/o procedimientos técnicos de ejecución, se encuentran en los archivos técnicos de la operación.

III. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y OPERATIVOS

A. Prestatario

- 3.1 El Prestatario para este Programa será la República de El Salvador, que se responsabilizará por el repago del préstamo y provera los fondos de contrapartida.

B. Organización

- 3.2 La organización de la ejecución del Programa tendría dos niveles: la coordinación y administración de fondos centralizados a nivel de la UTE (ver párrafos 3.7 y 3.8), y la ejecución de las actividades del Programa a nivel de las entidades coejecutoras. Dentro de este mecanismo de ejecución, el GOES transferirá a la UTE a título no reembolsable los recursos del Programa. La firma de un convenio entre el prestatario y la UTE para la transferencia de los recursos de préstamo y de la contrapartida local, será una condición previa al primer desembolso del préstamo.
- 3.3 La selección de la UTE como unidad coordinadora, se debe a su función de secretaría de la CCSJ, compuesta por los representantes de las instituciones claves del sector a su más alto nivel. 8/
- 3.4 Se aprovechará igualmente la capacidad establecida en cada una de las entidades coejecutoras, fortaleciendo las unidades de planificación existentes, tanto para que actuen como unidades ejecutoras de los aspectos del Programa que les correspondiera, como para asegurar el desempeño de sus atribuciones. Para el área de informática, se establecerá un comité de coordinación e integración formado por los jefes de informática en cada entidad coejecutora.
- 3.5 Con la finalidad de asegurar las relaciones entre la UTE y las entidades coejecutoras, deberá disponerse de un reglamento operativo para el Programa y de convenios firmados entre la UTE y dichas entidades coejecutoras en los que se establezcan las obligaciones de estas últimas para la ejecución de sus componentes. La puesta en vigencia del reglamento operativo y la firma de los convenios antes mencionados serían condiciones previas al primer desembolso del financiamiento del Banco.

8/ La CCSJ, integrada por el Presidente del Organo Judicial, el Ministro de Justicia, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República y el Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, tiene como objetivos realizar la coordinación de las instituciones del Sistema de Justicia, definir políticas y estrategias de desarrollo de dicho sector, y decidir sobre los planes, programas y proyectos comunes que deben ser desarrollados en el mismo.

1. Entidad coordinadora

- 3.6 La UTE fue creada en 1993 por Decreto Ejecutivo como una entidad adscrita al Ministerio de Justicia dependiente de una comisión de alto nivel, la Comisión Coordinadora para el Sector de Justicia (CCSJ), que fue establecida por el Convenio de Donación del Proyecto de Reforma Judicial II. Estas entidades fueron instituidas con la finalidad de ejecutar el proyecto mencionado que se encuentra en su etapa final de ejecución. (Ver párrafo 1.10).
- 3.7 Para dar una mayor autonomía a la UTE, ampliar y definir de forma más precisa su organización y sus funciones y clarificar su relación con la CCSJ, se ha elaborado una nueva ley orgánica de la UTE, aprobada el (15) de (febrero) de 1996 9/. La UTE es una entidad de derecho público, descentralizada, con autonomía en lo técnico, financiero y administrativo y con patrimonio y personalidad jurídica propios. Está compuesta por una comisión directiva, la CCSJ, que es el órgano decisorio y supervisor al más alto nivel, una dirección general ejecutiva y una unidad administrativa y financiera. La reglamentación de la ley antes mencionada será condición previa al primer desembolso del préstamo.
- 3.8 La UTE continuará actuando como el órgano executor de las políticas de la CCSA, para lo cual cuenta con personal adecuado. Para permitir que la UTE pueda atender también a la ejecución del Programa propuesto, se fortalecerá la UTE con la creación dentro de la misma de una unidad coordinadora del Programa BID. Esta unidad estará encargada de administrar los recursos del préstamo del Banco y de la contrapartida nacional, así como coordinar la ejecución de los componentes y supervisar los trámites administrativos y financieros.
- 3.9 Composición de la entidad coordinadora. La planta de personal técnico actual de la UTE se reduce a 1 Director General, 5 coordinadores técnicos y 1 gerente administrativo-financiero que están apoyados por 2 técnicos auxiliares. Estos profesionales cuentan con una experiencia en el sector y presentan "curricula vitae" adecuados.
- 3.10 Para la ejecución del Programa, se contratará un Coordinador General (experto internacional en programas similares), quien, en el marco de la UTE, tendrá bajo su responsabilidad la supervisión técnica y administrativa del Programa. Este coordinador deberá ser contratado antes del primer desembolso del préstamo. Asimismo se financiará la contratación de 4 coordinadores técnicos (consultores nacionales) para las áreas de reformas legales, menores, planeamiento y sistemas de información.

- 3.11 En las áreas financiera y administrativa, la UTE contará también con 7 nuevos profesionales especializados (1 coordinador de administración de finanzas, 1 contador, 2 especialistas en contratación de bienes y servicios, 1 auditor interno y 2 asistentes) para administrar los recursos del préstamo del Banco y de la contrapartida nacional. Igualmente se encargará de los trámites administrativos, incluyendo los mecanismos de control interno y de auditoría externa, los registros contables, la administración de personal y sobre todo, la contratación de bienes y servicios. La contratación de los profesionales para las nuevas posiciones en la UTE, en las áreas técnicas, financiera y administrativa, deberá ser hecha dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de elegibilidad del préstamo para desembolso.

2. Aspectos institucionales y financieros de las entidades co-ejecutoras

- 3.12 El Proyecto Reforma Judicial II fue desarrollado en estrecha coordinación con la UTE y la CCSJ, lo que representa una experiencia significativa para asegurar la coordinación técnica que se requiere para el Programa propuesto. Adicionalmente, se destaca en la UTE su validación a nivel de las instituciones del sector y su capacidad de convocatoria. Asimismo, el proyecto mencionado ha proporcionado a la UTE una capacidad institucional y operativa particularmente vinculada con la elaboración del Plan Quinquenal 1993-1997 que representa el primer esfuerzo en el país para integrar las entidades que componen el sector de justicia.
- 3.13 No obstante, la UTE tuvo una experiencia limitada en ciertas áreas principalmente en las que se refieren a los procedimientos de selección y de contratación de consultores y capacitadores, y en el manejo administrativo y financiero del Proyecto de Reforma Judicial II. Se manifiesta una adecuada calificación en los técnicos dedicados a la ejecución de actividades de manejo de medios, aspectos de organización y servicios, estando sus puntos débiles, por su corto período de funcionamiento, en algunos aspectos de gestión.
- 3.14 En cuanto a las entidades coejecutoras, éstas presentan una debilidad institucional destacada por la ausencia de un planeamiento estratégico de mediano plazo, sistemático e integral. Salvo la Corte Suprema, estas entidades no cuentan con unidades de informática debidamente implantadas y con recursos apropiados para acumular y procesar los cuantiosos volúmenes de información esenciales para el cumplimiento de la misión del sector de justicia. Se nota, también, carencias en la coordinación y comunicación tanto internas como interinstitucionales, y deficiencias en la calidad y disponibilidad de la información acumulada.
- 3.15 Fortalecer institucionalmente estas entidades, principalmente en las áreas mencionadas anteriormente es un elemento vital en el Programa. De un modo general, estas instituciones cuentan con

personal profesional que, con el apoyo técnico que se contempla en el Programa, podrá responder eficientemente a los desafíos de una gestión moderna.

- 3.16 Del análisis presupuestal de las coejecutoras, se pudo apreciar que éstas cuentan con la capacidad de ejecución financiera suficiente para absorber las necesidades de gestión del Programa, así como para cubrir los costos recurrentes que se derivan del mismo. Cabe destacar que el aporte local lo realizará el Gobierno Central a través de transferencia presupuestaria de fondos adicionales a cada una de las entidades coejecutoras. El análisis de los aspectos institucionales y financieros del Programa se encuentra en los archivos técnicos correspondientes.
- 3.17 Para el caso del ISPM, las asignaciones presupuestarias han venido incrementándose para atender los programas que se le han asignado. Existen indicios claros en apoyo a tal orden de cosas: los importantes aumentos en la asignación presupuestal del año 1995 y la sometida a discusión parlamentaria del año 1996 en la cual se propone asignaciones por más del equivalente de US\$10,0 millones.

C. Administración del Programa

1. Selección y supervisión de los consultores

- 3.18 En el diseño del Programa se ha analizado y tomado en cuenta tanto el mínimo número de consultores necesarios y la capacidad de las instituciones involucradas para absorber esta asistencia. La selección y supervisión de tales expertos es un factor clave para garantizar el éxito del Programa.
- 3.19 Por consiguiente, se han determinado los siguientes procedimientos para asegurar la calidad y supervisión efectiva de los mismos:
 - a. La unidad Coordinadora del Programa dentro de la UTE, encargada de la adquisición de bienes y servicios para el Programa estará conformada por un equipo reducido de personas bien calificadas para la selección, contratación y supervisión de consultores;
 - b. teniendo en cuenta la necesidad de la contratación de un alto número de consultores individuales, especialmente para cursos de capacitación de corta duración, se recomienda que, dentro de los 180 días a partir de la fecha de elegibilidad para el primer desembolso del préstamo, se contrate una firma consultora o agencia especializada para que ayude a la UTE en la selección, contratación y supervisión de consultores individuales, y capacite a dicha unidad para que en los años sucesivos realice estas tareas. La selección de dicha firma o agencia deberá contar con la aprobación previa del Banco (Equipo de Proyecto). El Equipo de Proyecto, al final del primer año de ejecución, revisaría con la UTE la situación de la contratación y supervisión mencionada y, si fuera del caso,

recomendaría la extensión del período de trabajo de la firma o agencia especializada; y

- c. las entidades coejecutoras también participarán en la supervisión técnica del trabajo diario de los consultores. 10/

2. Supervisión de las obras físicas

- 3.20 Para elaborar pliegos de licitación, supervisar la ejecución y realizar la ingeniería de detalle de las obras físicas contempladas, se recomienda la contratación de los servicios de una firma consultora especializada, previo al inicio de las obras correspondientes.

3. Preparación y revisión de planes de trabajo y presupuestos anuales

- 3.21 Como resultado del proceso de análisis de esta operación y de acuerdo con las prioridades que fueron definidas con las autoridades del Gobierno, se ha elaborado un plan de trabajo detallado para el primer año de ejecución del Programa (véase Anexo III). En el caso en que se introduzcan modificaciones en dicho plan, éste deberá ser sometido a la consideración del Banco previo a su aprobación por la UTE. Las actividades, metas y presupuestos de los componentes han sido establecidos tentativamente también para los años 2 a 4 (la documentación correspondiente se encuentra en los archivos de la operación). Sin embargo, debido a la naturaleza de estas actividades, debe preverse la necesidad de efectuar cambios y ajustes en dichos planes 11/. Por consiguiente, los planes de trabajo para los años 2 a 4 serán preparados y revisados en el proceso de revisión anual a que se refieren los párrafos siguientes.
- 3.22 Un mes antes de la conclusión del primer año de ejecución del Programa, la UTE enviará al Banco un informe que incluya el grado de cumplimiento de los indicadores de progreso previstos para ese año y un estado del presupuesto gastado, así como una propuesta detallada del plan de trabajo y del presupuesto para el año de ejecución siguiente. El Banco (representado por el Equipo de Proyecto y la Representación) y la UTE se reunirán para revisar dicho informe y aprobar dicha propuesta. La aprobación por el Banco de dicha propuesta será condición previa a los desembolsos para el año siguiente.

10/ La Escuela Judicial, por ejemplo, lleva a cabo evaluaciones del trabajo de todos los profesores que suministran cursos para la referida escuela.

11/ Por ejemplo, los gastos de divulgación de las nuevas legislaciones o de capacitación de los operadores encargados de aplicarlas no se harán sino cuando dichas leyes sean promulgadas, y el momento en que tales actividades tengan lugar no puede determinarse ahora; igualmente, los detalles de la implementación de otras actividades dependerán de los resultados de los diagnósticos previstos en algunas áreas.

- 3.23 Estas revisiones anuales proveerán un mecanismo para el monitoreo de la ejecución del Programa y favorecerán la flexibilidad necesaria para la determinación de las actividades que deban llevarse a cabo después del primer año.

4. Supervisión y monitoreo

- 3.24 La supervisión del Programa será llevada a cabo por la Representación del Banco en El Salvador, con el apoyo del Equipo del Proyecto y de consultores contratados para estos fines. Se contempla un monitoreo continuo que comenzará desde el inicio de la ejecución del Programa. Estas actividades serán apoyadas por consultorías que están previstas en el Programa.

5. Evaluación de desempeño al tercer año

- 3.25 Al final del tercer año de ejecución del Programa habrá una evaluación del desempeño, para indicar los ajustes necesarios en el último año de ejecución, identificar las experiencias exitosas, y ayudar en garantizar la sostenibilidad de los beneficios del Programa después de su ejecución. La UTE enviará al Equipo de Proyecto, un mes antes de la misión de evaluación, un informe indicando el cumplimiento de las metas, los resultados de las actividades medidas de acuerdo con los indicadores de impacto (Anexo I) y criterios anteriormente mencionados, un análisis de la calidad de la ejecución del Programa y sugerencias sobre los ajustes que se consideren necesarios. Los evaluadores dispondrán asimismo de los resultados de las encuestas previstas en el párrafo 3.27.

D. Sustentabilidad

- 3.26 La sustentabilidad del presente Programa debe reflejarse en la institucionalización de las reformas que se están implementando dentro del marco del mismo. Este Programa representa la tercer etapa de reforma judicial emprendida por El Salvador. Como el Programa fue diseñado para consolidar y complementar las reformas anteriores, este representa la continuación de un proceso de largo plazo. El Programa se distingue de las etapas anteriores de reforma en que incluye un mayor énfasis en el fortalecimiento de las instituciones del Sistema de Justicia y en el mejoramiento de la capacidad de planeamiento y de gestión de proyectos de estas instituciones. Se espera que, con estos elementos de fortalecimiento, se asegure la institucionalización de las reformas iniciadas en el sector. Por otra parte, el GOES ha expresado su voluntad de asignar los recursos necesarios para la continuación de los proyectos iniciados o ampliados dentro del marco del Programa, después de su finalización.

E. Encuestas de opinión para la evaluación del éxito del Programa

- 3.27 Con la finalidad de evaluar el impacto del Programa sobre los objetivos definidos, se llevarán a cabo encuestas de opinión en dos períodos del transcurso del Programa. Al principio, una primera encuesta, para la cual se contrataría un consultor dentro de un plazo de hasta 90 días a partir de la fecha de elegibilidad del préstamo para desembolsos, para establecer los datos básicos necesarios con el objeto de medir el impacto en una segunda etapa, que tendrá lugar al final del tercer año de ejecución del Programa. Se contratarán los servicios de consultores para el diseño, supervisión y análisis de sus resultados. Se estima que se requerirán consultorías por aproximadamente 4 meses. El trabajo de campo y la tabulación de los resultados correrán a cargo de una firma especializada contratada para estos fines. Además de este propósito, los datos recogidos mediante tales encuestas constituirán un importante y útil insumo para una mejor planificación de las instituciones del Sistema de Justicia, las cuales podrán disponer de información pertinente sobre las necesidades y percepciones de sus posibles usuarios.

F. Cronograma de ejecución y de desembolsos

- 3.28 Del análisis de las principales acciones que se deben realizar para la ejecución del Programa, se estima un período de ejecución de 4 años. El cronograma tentativo de las actividades del Programa se encuentra en los archivos técnicos del Banco. El Cronograma tentativo de desembolsos figura en el cuadro siguiente:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (en miles de US\$)					
	ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	TOTAL
BID	7,0	9,0	3,4	2,8	22,2
LOCAL	1,3	1,8	1,0	1,0	5,1
TOTAL	8,3	10,8	4,4	3,8	27,3
%	30,0	39,4	16,4	14,2	100,0

G. Adquisiciones de bienes y servicios

- 3.29 Obras civiles. El Programa incluirá la rehabilitación de la infraestructura de 3 centros de reclusión y rehabilitación de menores, la construcción de 4 clínicas de desintoxicación, la construcción de un albergue para víctimas de violencia familiar, el establecimiento de 5 nuevos talleres y la adecuación de 4 talleres existentes de formación y producción para menores, la construcción de 3 delegaciones regionales del ISPM y de 3 resguardos y un centro regional integral de justicia (centro piloto).
- 3.30 Pese a no ser mandatorio, se recomendará la contratación de paquetes de obras, a fin de asegurar la competencia e interés de contratistas locales. Las normas de LPI se emplearán sólo cuando los paquetes de obras excedan el equivalente de US\$1 millón, aunque no se esperan contratos de esta magnitud. Aquellos con un costo equivalente entre US\$250 mil y US\$1 millón o más serán adjudicados

por medio de LPN. Las obras con un costo inferior al equivalente de US\$250 mil se adjudicarán por medio de licitaciones privadas, necesitándose invitar a por lo menos cinco contratistas/proveedores. La contratación directa en zonas rurales remotas se aplicará para obras inferiores al equivalente de US\$100 mil.

- 3.31 La Representación del Banco examinará los documentos de licitación para la construcción o adquisición de bienes de conformidad con los procedimientos regulares del Banco.
- 3.32 Equipos y materiales. La adquisición de bienes por un costo equivalente a US\$150 mil o menor se realizará mediante procedimientos de licitaciones privadas o concurso de precios, con invitaciones a por lo menos tres proveedores. Se utilizarán procedimientos LPN para la compra de bienes con un valor equivalente entre US\$150 mil y US\$250 mil. Las normas LPI se aplicarán para bienes superiores a US\$250 mil. Los procedimientos de licitaciones privadas y LPN estarán abiertos a proveedores internacionales.
- 3.33 Asistencia técnica y estudios. El Programa financiará asistencia técnica y servicios de consultoría para realizar estudios, diseños de capacitación, preparación de materiales, campañas de comunicación y otras actividades en apoyo al Programa. Se emplearán métodos de Concurso Público Internacional (CPI) para aquellos contratos de firmas consultoras por un valor equivalente o superior a US\$200 mil. Los trámites de Concurso Público Nacional (CPN), aceptables para el Banco, se aplicarán a contratos de consultorías por un monto equivalente entre US\$100 mil y US\$199.999. Los servicios por cantidades inferiores pueden pactarse mediante concursos privados (CP), con un mínimo de invitaciones a tres consultores. Las invitaciones directas y los procedimientos CPN estarán abiertos a consultores internacionales.

H. Reconocimiento de gastos

- 3.34 Se reconocerá gastos previos a la aprobación del préstamo, de conformidad con las disposiciones del Banco, hasta por un monto máximo de US\$200.000 para cubrir gastos efectuados por el GOES para avanzar con la preparación del reglamento operativo y los trámites para la selección del Coordinador General y los 4 coordinadores técnicos (consultores nacionales) para las áreas de reformas legales, menores, planeamiento y sistemas de información.

I. Auditoría externa

- 3.35 Los estados financieros del Programa deberán ser examinados por una firma de auditores externos aceptable para el Banco durante el período de ejecución del mismo y de acuerdo con las normas del Banco al respecto.

IV. VIABILIDAD Y RIESGOS

A. Viabilidad Institucional, política y financiera ^{12/}

- 4.1 En este primer esfuerzo del Banco para respaldar el Sistema de Justicia de El Salvador ^{13/}, para el diseño del Programa se ha utilizado como guía la necesidad de ampliar la confianza pública en dicho Sistema, permitiendo enfrentar las necesidades de reconstrucción y reforzar la paz y la democracia. Se analizaron las experiencias de los proyectos anteriores y en ejecución (Proyectos Reforma Judicial I y II), dándole al presente Programa un enfoque integrado que: (i) sea consistente con las reformas en proceso; (ii) ayude a resolver las urgencias del sector; y (iii) tienda a institucionalizar el proceso de reforma.

1. Viabilidad institucional

- 4.2 La viabilidad institucional de la ejecución del Programa se sustenta principalmente en lo siguiente:
- a. La creación de una Unidad de Coordinación del Proyecto BID insertada en el marco de la UTE, permite que la ejecución del Programa se beneficie de la capacidad de convocatoria de esta última, así como de la experiencia que adquirió en la ejecución del Proyecto Reforma Judicial II, y de la flexibilidad administrativa con que se la ha dotado;
 - b. el Proyecto Reforma Judicial II, ha permitido desarrollar capacidad profesional local con cierto conocimiento en las áreas contempladas en el Programa;
 - c. el Programa contempla un subcomponente para el fortalecimiento de las unidades de planeación de las entidades coejecutoras, el cual persigue el doble propósito de: (i) profundizar y desarrollar la capacidad de planeación de las instituciones y, (ii) dotarlas de una unidad capaz de dirigir y ejecutar los componentes previstos para ellas en el Programa;
 - d. la participación de una agencia especializada la búsqueda y contratación de los consultores internacionales y para la adquisiciones de bienes y servicios importados;
 - e. los convenios previstos entre la UTE y las entidades ejecutoras facilitarán la supervisión, condiciones y procedimientos por las que se regirá el Programa y regularán el traspaso de

^{12/} El análisis detallado y la documentación técnica correspondiente se encuentran en los archivos técnicos de la operación.

^{13/} La única operación previa del Banco en el sector de justicia fue aprobada en 1995 para Costa Rica y enfatiza en la administración de tribunales, en un contexto en que el Sistema de Justicia goza de una estabilidad y de un prestigio de larga duración.

recursos del préstamo y del aporte local que se desee realizar a las entidades coejecutoras;

- f. la participación de un funcionario internacional en la Dirección del Programa (UTE), es también otro elemento importante para asegurar la viabilidad de la ejecución de la operación; y
- g. una firma consultora apoyará a las entidades coejecutoras en la supervisión de las construcciones (las obras de construcción y rehabilitaciones que se incluyen en el Programa, son obras simples, por lo que su ejecución no debiera implicar ninguna restricción técnica).

2. Viabilidad política

- 4.3 Por otra parte, la demanda de soluciones por la comunidad, la madurez que esta tiene de las debilidades y problemas del sector, los costos sociales y económicos para la sociedad salvadoreña que conlleva una administración de justicia ineficiente, los avances logrados hasta la fecha asociado a la voluntad política de las autoridades pertinentes de continuar adelante el proceso de reforma, así como la creación de una comisión coordinadora del sector, constituyen elementos de un marco institucional y político que viabilizan la ejecución del Programa.
- 4.4 El proceso de preparación del Programa ha resultado en un consenso por parte de las seis entidades coejecutoras en torno del contenido de los componentes, y en su consideración como propietarios de los correspondientes componentes del Programa. La organización de la ejecución del Programa también cuenta con el acuerdo de todas las instituciones participantes. Esto se demuestra por la preparación y aprobación en un período corto de la ley que da a la UTE su autonomía y personalidad jurídica propia.

3. Viabilidad financiera

- 4.5 La factibilidad financiera del Programa se analizó considerando la capacidad del GOES para servir la deuda, disponer oportunamente de los recursos de contrapartida local, relacionándolo con el esfuerzo presupuestario que representa. Adicionalmente se consideró el impacto de los gastos recurrentes incrementales (operación y mantenimiento) originados por el Programa.
- 4.6 Endeudamiento del Gobierno Central. El incremento de la deuda externa por el eventual préstamo del Banco representará menos de un 1% de la deuda pública externa. En tanto el servicio proyectado de dicha deuda para el presente año es de US\$294 millones, de los cuales US\$157 millones serían para servir el capital y US\$77 millones para intereses. El servicio del préstamo del Banco, expresado en valor presente, ascendería aproximadamente a US\$1,4 millones, lo que equivale al 0,47% del servicio de la deuda.

- 4.7 El gasto total (US\$66 millones) de las entidades coejecutoras, representa un 0,7% del PIB y un 4,9% de la asignación presupuestaria para 1995. El déficit del sector público no financiero, después de las donaciones, se ha reducido del 4,8% del PIB en 1992 al 0,6% en el 1994. Situación que ha sido posible principalmente gracias al mejoramiento de la recaudación local, la intruducción del IVA y la reorganización de la administración fiscal. Para 1995 se espera un equilibrio fiscal y el presupuesto para 1996 del gobierno central estaría aumentándo en un 26%, sobre el presupuesto votado para 1995.
- 4.8 Cabe destacar que el PIB del país creció en los últimos 4 años en una tasa promedio superior al 6% anual y la inflación estimada para el 1995 no superará el 11%.
- 4.9 Aporte local. Estaría asegurado por el GOES (Ministerio de Hacienda) quien haría transferir anualmente, vía presupuesto, a las entidades coejecutoras los recursos incrementales para cubrir la contrapartida local requerida.
- 4.10 Costos recurrentes adicionales. Estos costos se contemplaron por: (i) el aumento neto de personal requerido a partir de la implementación de las actividades previstas; (ii) el incremento de grados dentro de las estructuras escalafonarias de los organismos, producto de los procesos de capacitación específicos que se implementen con el Programa; (iii) el aumento de los gastos en materiales y suministros, necesarios para mantener un adecuado nivel de operación; y (iv) el mantenimiento del equipamiento y de las obras construidas y rehabilitadas con el Programa.
- 4.11 Estos costos recurrentes con impacto en el presupuesto de cada uno de los organismos participantes, serían los siguientes:

COSTOS RECURRENTE SOBRE GASTOS PROYECTADOS (Expresado como un porcentaje del presupuesto proyectado)				
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4
I.S.P.M. 14/	0	1,85%	4,16%	4,03%
O.J.	0	0,06%	0,13%	0,18%
M.J.	0	0,17%	0,29%	0,37%
F.G.	0	0,51%	1,01%	1,44%
P.G.	0	0,07%	0,23%	0,36%

14/ Para el caso del ISPM, existen indicios claros del apoyo del gobierno a su función. Así lo reflejan los importantes aumentos en la asignación presupuestal del año 1995 y la sometida a discusión parlamentaria para el año 1996.

- 4.12 Conclusión viabilidad financiera ^{15/}. Considerando: (i) el poco significado del impacto del préstamo en el servicio de la deuda; (ii) las buenas perspectivas económicas del país; (iii) el ordenamiento perseguido en las finanzas públicas; (iv) que el total de los costos recurrentes proyectados para 1999 (período de máximo crecimiento) es de US\$0,898 millones, representando el 0,73 % del total del presupuesto de las entidades; y (v) que las asignaciones presupuestales para el ISPM aumentarán en términos razonables junto con una reducción de costos, derivada de la disminución esperada de la violencia juvenil; se estima que el Programa es financieramente viable.

C. Viabilidad Socio-económica

- 4.13 Una mala administración de justicia tiene consecuencias económicas desfavorables por la vía de elevados costos sociales, los cuales pueden ser observados desde varias perspectivas. En primer lugar, la poca accesibilidad al sistema, la extensión en los juicios y la obsolescencia normativa, resultan en restricciones a la actividad económica y consecuentemente afectan el crecimiento y el bienestar social. En segundo lugar, los costos incurridos por demandantes y demandados, resultan superiores a los que una gestión eficiente exigiría. En tercer lugar, los costos internos del propio sistema de justicia resultan altos.
- 4.14 Los esfuerzos realizados para integrar a las normas y usos de las mayorías, a los grupos e individuos con mayor riesgo de disgregación (niños en medios familiares adversos, en situación de abandono, menores infractores, etc.), tienen por consecuencia de mediano y largo plazo una disminución en la presión de demanda sobre el sistema de administración de justicia.
- 4.15 La seguridad jurídica es una condición necesaria para la confianza de los inversionistas tanto domésticos como extranjeros, necesaria para mantener altas tasas de crecimiento. Es la seguridad jurídica, la transparencia, consenso e imparcialidad del marco normativo, lo que hace propicia la inversión. La inexistencia de reglas consensuales y claras y/o, la ausencia de mecanismos para su cumplimiento, derivan en la creación de modalidades informales de acuerdos normativos, restringidas a subgrupos, que inhiben significativamente el universo transaccional por efecto de la atomización, deprimiendo así el crecimiento. En el mismo sentido, en un contexto de interrelaciones comerciales restringidas y disgregadas, las posibilidades para la innovación y difusión se encuentran severamente limitadas.

^{15/}

Información estadística para la medición del impacto financiero y cuadros de gastos por los componentes del Programa se encuentran en los archivos técnicos de la operación.

1. Análisis económico de los componentes de infraestructura

- 4.16 En la determinación de la construcción de las tres delegaciones regionales del ISPM, con los respectivos centros de resguardos, y para dotarlas con equipos de comunicación y de un vehículo en cada una de ellas, se utilizó el criterio de costo eficiencia, con relación a la alternativa de construir y mantener en operación una delegación en cada uno de los 14 departamentos del país. En cuanto a la ubicación de las delegaciones, se siguió el criterio de regionalizar el país de acuerdo a la demanda actual, que no estaba siendo atendida y a la proyectada. Por tal motivo, el ISPM decidió construir una delegación en la zona oriental, otra en la occidental y una otra en la zona central.
- 4.17 Para la selección de la localización del centro piloto integrado de justicia, se utilizarán criterios de demanda suficiente para el horizonte previsto. Para tales efectos se considerará la estimación de la población general usuaria y potencial.

2. Análisis de beneficiarios de bajos ingresos

- 4.18 El porcentaje de los menores atendidos por el ISPM en el último año, señala que más del 85% provenían de hogares pobres. Si se tiene en cuenta que los servicios del ISPM se concentran actualmente en San Salvador, donde los niveles de pobreza son menores que en el resto del país, y que, el Programa incluye la extensión de servicios a otras zonas del país, se puede afirmar que más de 85% de los menores atendidos por el componente son pobres. El componente de menores representa el 53% del costo total del Programa.
- 4.19 El Sistema de Justicia actual reduce el acceso de la población más pobre por la lentitud y costo de los procesos judiciales. Por tanto las mejoras a alcanzarse en la eficiencia interna del sistema tendrán resultados distributivos favorables para los sectores más pobres.

C. Impacto sobre la Mujer

- 4.20 Si se tiene en cuenta que el objetivo esencial del Programa es mejorar el funcionamiento de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia y, por consiguiente, incrementar el grado de confianza de la población en dicho Sector, su cumplimiento tendrá un impacto sobre todos los ciudadanos (hombres y mujeres, adultos y niños).
- 4.21 Las mujeres y los niños se beneficiarán específicamente del fortalecimiento de la Procuraduría General, organismo responsable de la protección de sus derechos e intereses. El componente de justicia para menores, en especial lo relacionado con su reinserción social, tendrá un impacto directo sobre el bienestar de niños y jóvenes, así como sobre sus madres, y, en la medida en que las actividades orientadas a la prevención de la delincuencia

juvenil sean exitosas, contribuirá a la reducción de este grave fenómeno social. La construcción de un refugio para víctimas de violencia familiar, también beneficiará directamente a niños y mujeres.

- 4.22 Además, en su calidad de usuaria del sistema de justicia, la mujer se beneficiará de los programas que puedan implantarse en el marco de los métodos alternos de solución de controversias, ya que la capacitación de los jueces competentes para aplicar mecanismos conciliatorios en asuntos familiares y de menores debe agilizar la consideración de causas en estas áreas. Los términos de referencia para los capacitadores de jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos, personal judicial, policías, etc., todos ellos funcionarios que han de tratar con los menores infractores y sus familias, serán elaborados con la colaboración de la unidad "Mujeres en Desarrollo" del Banco con el propósito de sensibilizar a dichos funcionarios sobre la manera de tratar a las mujeres y a los niños implicados en el Sistema de Justicia.

D. Medio Ambiente

- 4.23 El Comité del Medio Ambiente clasificó esta operación en la categoría II, recomendándose que se tomen en consideración, tanto las medidas de protección ambiental como las relacionadas con la protección contra desastres naturales. En ese sentido, para la elaboración de los diseños de ingeniería y arquitectura, se tuvieron en consideración las recomendaciones del CMA. Para la preparación de cada proyecto, se procedió a una evaluación ambiental que previera los posibles impactos negativos relacionados con: la implantación (terracería, uso del suelo, proximidad a fuentes contaminantes, etc); la infraestructura de servicios sanitarios (agua potable, desagüe, recolección de residuos, etc); el funcionamiento de los servicios (manejo de gases, radiaciones, higiene ambiental, seguridad, etc.).

E. Riesgos del Programa

- 4.24 La exitosa implantación del Programa requerirá la participación de entidades de los sectores judicial y ejecutivo, así como la aprobación de leyes por la Asamblea Legislativa. El enfoque integrado del Programa es crucial para la mejoría del Sistema de Justicia. Dicho enfoque también requiere la necesidad de mantener el consenso y la cooperación entre las varias entidades participantes. Como se indicó en el párrafo 5.2 de este Informe, el consenso que existe entre las instituciones del sistema de justicia, el Organismo Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, ha sido demostrado durante la preparación del Programa, por pronunciamientos y acciones tomadas. El riesgo por lo tanto perder un consenso alcanzado. Sin embargo, este riesgo parece atenuado, si se tiene en cuenta que la coordinación existente entre las instituciones principales del sector de justicia desde 1993 establece un antecedente para una cooperación y consenso sustentados en el sector.

- 4.25 La complejidad de la operación conlleva un riesgo de demoras en su implantación. Se considera que el mismo se ha mitigado a través del diseño de la unidad de coordinación y por los mecanismos de ejecución previstos. Además las revisiones anuales del Programa permitirán ajustes en el contenido del Programa, así como en su mecanismo de ejecución, si fueran necesarios para su mejor ejecución.

F. Conclusiones y recomendaciones

- 4.26 El Programa se considera técnica, institucional, financiera, socioeconómica, jurídica y ambientalmente viable, por lo que se recomienda su aprobación por el Directorio del Banco.

INDICADORES DE IMPACTO

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES	INDICADOR DE IMPACTO	INSTRUMENTO DE MEDIDA	DATOS EXISTENTES (DATOS PRECISADOS)
Objetivo general del Programa: incrementar la confianza del público en el Sistema de Justicia	- Incremento de la confianza en el Sistema de Justicia	- Encuesta de opinión	La confianza actual en el Sistema de Justicia es: ninguna 39.7%; poca 30.8% <u>1/</u> (encuesta detallada sobre Sistema de Justicia al principio y al final del Programa)
COMPONENTE 1: REFORMAS LEGALES. PROPÓSITO: RESPALDAR LAS REFORMAS LEGALES INICIADAS POR EL GOBIERNO Y APOYAR SUS ESFUERZOS DE IMPULSAR NUEVAS INICIATIVAS EN ÁREAS DESATENDIDAS			
Subcomponente 1. Apoyo a la implementación de las reformas legales en curso - Publicación y divulgación de la nueva legislación penal - Actividades de capacitación	- Mejoramiento del grado de conocimiento de la población, de los abogados litigantes en lo penal - Incremento de la confianza en el Sistema de Justicia - Aplicación en la práctica de la nueva legislación	- Encuesta de opinión - Encuesta de opinión - Evaluación de las actividades de capacitación - Encuesta de opinión	- Ninguno (encuesta al principio y al final del Programa) - La confianza en el sistema de justicia es: ninguna 39.7%; poca 30.8% (encuesta al principio y al final del Programa) - Ninguno (evaluación de las actividades de capacitación y encuesta)
Subcomponente 2: Reforma de legislación en el área administrativa	Aprobación de legislación que facilite y haga mas transparentes los procesos administrativos - Conocimiento de la nueva legislación por los operadores del Sistema de Justicia y los funcionarios	- Informes trimestrales de progreso - Encuesta de opinión	- Informes trimestrales de progreso - Conocimiento actual = 0 (encuesta al principio y al final del Programa)

1/ Encuesta de opinión del público por IUDOP (Instituto de la Universidad de Opinión Pública, UCA), San Salvador, 28 de enero - 5 de febrero de 1995.

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES	INDICADOR DE IMPACTO	INSTRUMENTO DE MEDIDA	DATOS EXISTENTES (DATOS PRECISADOS)
<ul style="list-style-type: none"> - Publicación y divulgación de una nueva Ley de Procedimientos Administrativos - Actividades de capacitación - Elaboración, publicación y divulgación de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa - Actividades de capacitación - Creación de 3 Juzgados de Primera Instancia en materia administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento de la confianza en el Sistema de Justicia - Aplicación en la práctica de la nueva legislación - Aprobación de legislación que expande capacidad del sistema de justicia de tratar de procesos administrativos - Conocimiento de la nueva legislación por los operadores del Sistema de Justicia - Incremento de la confianza en el Sistema de Justicia - Aplicación en la práctica de la nueva legislación - Número de procesos administrativos presentados al Organo Judicial se aumenta de XX 2/ por año hasta XX por año 	<ul style="list-style-type: none"> - Encuesta de opinión - Evaluación de las actividades de capacitación - Evidencia de aprobación de legislación - Encuesta de opinión - Encuesta de opinión - Evaluación de las actividades de capacitación - Encuesta de opinión - Encuesta de opinión (grado de satisfacción de los usuarios) 	<ul style="list-style-type: none"> - La confianza en el sistema de justicia es: ninguna 39.7%; poca 30.8% (encuesta al principio y al final del Programa) - Aplicación actual = 0 (evaluación de las actividades de capacitación y encuesta al principio y al final del Programa) - Conocimiento actual = 0 (encuesta al principio y al final del Programa) - Encuesta al principio y al final del Programa - Aplicación actual = 0 (evaluación de las actividades de capacitación y encuesta al principio y al final del Programa) - Número de procesos administrativos presentados a la Suprema Corte en 1994 = XX (encuesta al principio y al final del Programa)
Subcomponente 3: Aplicación de la nueva legislación de arbitraje y conciliación	- Mayor y mejor utilización de conciliación por jueces de familia y de menores, por ISPM, por procuradores, por estudiantes de derecho.	Estadísticas judiciales para indicar el número de procesos familiares y juveniles conciliados; formularios de evaluación para indicar el nivel de satisfacción de las partes a la conciliación.	- Estadísticas judiciales actualmente indican si un proceso es conciliado o no (formularios de evaluación serán diseñados como actividades del Programa)
COMPONENTE II: MEJORA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA MENORES. PROPÓSITO: PREVENIR LA DELINCUENCIA JUVENIL Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS MENORES INTERNOS			
Subcomponente 1: Rehabilitación de la infraestructura de los centros de menores existentes	- Cumplimiento con las normas de Naciones Unidas para centros de menores, sobre todo en lo que se refiere a hacinamiento, sanidad y seguridad	- Visitas a los centros usando un instrumento que mida y cuantifique los requisitos de Naciones Unidas	- Visitas a los centros para establecer datos de base sobre puntos a ser evaluados posteriormente

2/E1 "XX" indica números a establecerse como parte de la actividad del diseño del mecanismo de evaluación del Programa.

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES	INDICADOR DE IMPACTO	INSTRUMENTO DE MEDIDA	DATOS EXISTENTES (DATOS PRECISADOS)
		- La seguridad se puede medir tomando en consideración el número de fugas, motines, asaltos, etc. También sería importante tomar en consideración la percepción de la población al respecto	- Datos existentes y encuestas
Subcomponente 2: Establecimiento de 3 delegaciones regionales del ISPM - Construcción de 3 centros de resguardo	- Mayor acceso de la población a los servicios del ISPM - Mayor satisfacción entre usuarios - Mejores condiciones para los internos pendientes a proceso - Mejor acceso de jóvenes a los tribunales de menores y procuradores	- Datos sobre la carga laboral del ISPM. Se asume un incremento en el número de casos atendidos en por lo menos un 33% - Encuestas entre usuarios - Evaluación de condiciones actuales. Visitas de campo - Entrevistas con jueces, fiscales y procuradores	- Datos sobre la carga laboral del ISPM - Revisión de aumentos del número de casos de acuerdo a la apertura de nuevos centros - Encuestas entre usuarios al inicio del Programa - Visitas de campo a centros de resguardo actuales y entrevistas con jóvenes - Entrevistas con jueces, fiscales y procuradores al inicio del Programa
Subcomponente 3: Fortalecimiento de los programas de prevención y reinserción social - Para menores en riesgo social en proceso de reeducación y para jóvenes internos en proceso de liberación - Para miembros de pandillas juveniles - Consiste en programas de capacitación laboral y educación social	- 1.750 jóvenes capacitados en materias tales como mecánica automotriz, reparación de máquinas industriales, etc. - Empleo de xxjóvenes como resultado de la capacitación - Reducción en la tasa de reincidencia en un xx% - Favorecer la separación de miembros de pandillas juveniles de estos grupos y su incorporación a la sociedad Empleo de xxjóvenes como resultado de la capacitación	- Evaluación de la capacitación - Número de jóvenes con empleo al final de la capacitación en los campos en que fueron capacitados - Revisión de los datos sobre actividad delictiva en los tribunales de menores para los menores atendidos y comparación con la población desatendida - xx porcentaje de miembros de pandillas que han abandonado las maras Número de jóvenes con empleo al final de la capacitación en los campos en que fueron capacitados	- Recopilación de los datos existentes ya que el Programa apoyará la extensión de este Programa - Recopilación de datos existentes - Recopilación de datos existentes Recopilación de datos existentes ya que el Programa apoyará la extensión de este Programa

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES	INDICADOR DE IMPACTO	INSTRUMENTO DE MEDIDA	DATOS EXISTENTES (DATOS PRECISADOS)
- Capacitación de promotores	<p>- 4.025 personas capacitadas</p> <p>- Mejor entendimiento de la problemática de los menores y el papel de la comunidad en su solución</p> <p>- Mayor participación de los gobiernos locales en actividades de prevención</p>	<p>- Número de personas capacitadas</p> <p>- Evaluaciones de los cursos</p> <p>- Incremento en el número de actividades patrocinadas por comunidades y gobiernos locales</p>	<p>- Evaluaciones de los cursos existentes</p> <p>- Breve encuesta previa al curso</p> <p>- Número de actividades patrocinadas por comunidades y gobiernos locales actualmente</p>
<p>Subcomponente 4: Apoyo a los programas de atención institucionalizada</p> <p>- Desintoxicación de internos</p> <p>- Diversificación y equipamiento de cinco talleres de formación y producción</p>	<p>- Establecimiento de tres centros para desintoxicación de internos (menores infractores varones, varones en riesgo y mujeres de ambas categorías)</p> <p>- Reducción en el porcentaje (de xx% a xx%) niños adictos a ciertas drogas o alcohol</p> <p>- Establecimiento de cinco talleres</p> <p>- Modernización del programa para ofrecer una formación dirigida más al mercado laboral técnico que al artesanal</p> <p>- Empleo de xxjóvenes como resultado de la capacitación</p> <p>- Reducción en la tasa de reincidencia en un xx%</p>	<p>- Un estudio completado y el primer centro es evaluado para implementar los programas en los otros centros</p> <p>- Entrevistas con los internos, revisión de expedientes, encuestas que garanticen anonimato</p> <p>- Evaluación</p> <p>- Evaluación de las remodelaciones y cambios en los programas de capacitación</p> <p>- Número de jóvenes con empleo al final de la capacitación en los campos en que fueron capacitados</p> <p>- Revisión de los datos sobre actividad delictiva en los tribunales de menores atendidos y comparación con la población desatendida</p>	<p>- No existe ningún centro de este tipo</p> <p>- Existe un estimado sobre el porcentaje de niños adictos entre la población de menores recluidos por el ISPM. Este tiene que ser actualizado</p> <p>- Evaluación de los centros existentes</p> <p>- Revisión de los programas existentes</p> <p>- Recopilación de los datos existentes ya que el Programa apoyará la extensión de esta actividad</p> <p>- Revisión de datos existentes</p>
<p>Subcomponente 5: Fortalecimiento de programas para prevenir y reducir la violencia familiar</p>	<p>- Construcción de un refugio temporal en San Salvador para víctimas de violencia familiar</p> <p>- Mayor confianza de víctimas en el sistema de justicia</p> <p>- Aumento en el número de denuncias como resultado de la mayor confianza</p>	<p>- Evaluación de la construcción</p> <p>- Encuestas entre usuarios y entrevistas a jueces, fiscales y procuradores</p> <p>- Revisión de información en los tribunales y la policía</p>	<p>- No aplica</p> <p>- Ninguno (encuestas de opinión)</p> <p>- Revisión de información en los tribunales y la policía</p>

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES	INDICADOR DE IMPACTO	INSTRUMENTO DE MEDIDA	DATOS EXISTENTES (DATOS PRECISADOS)
Subcomponente 6: Establecimiento de un fondo especial para apoyar iniciativas innovadoras de ONGs	<ul style="list-style-type: none"> - 20 donaciones de \$25,000 durante el curso del Programa - Implementación de proyectos que han obtenido financiamiento por el apoyo inicial que se le brindó a través de estas donaciones - Incremento en número de iniciativas innovadoras 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del tipo y número de aplicaciones recibidas por concurso - Informe a ser presentado un año después de finalizar el proyecto inicialmente financiado por el Programa 	<ul style="list-style-type: none"> - Ninguna (evaluación de aplicaciones) - La propuesta inicial (comparación con informe)
Subcomponente 7: Establecimiento de un programa de capacitación para los operadores del sistema de menores	<ul style="list-style-type: none"> - Conocimientos de los operadores del Sistema de Justicia de Menores y de los funcionarios en términos de tratamiento de menores 	<ul style="list-style-type: none"> - Encuestas y evaluaciones de las personas capacitadas. Ya que el universo a capacitar es limitado se asume que el Programa capacitará a casi todos los usuarios por lo que no será necesario comparar las personas capacitadas con grupos de control 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación actual y evaluaciones de los programas de capacitación y encuesta al principio y al final del Programa
COMPONENTE III. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS EN MATERIA DE PLANEACION Y SISTEMA DE INFORMACION. PROPÓSITO: MEJORAR LA FUNCIÓN DE PLANEAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE JUSTICIA			
Subcomponente 1: Fortalecimiento de unidades de planificación	<ul style="list-style-type: none"> - Innovación en servicios y en procesos - Utilización regular de nuevas metodologías para formulación y seguimiento de presupuestos - Modernización de la gestión administrativa - Indicadores utilizados para formulación de estrategias - Mejora de la eficiencia interna - Establecimiento de políticas de RRHH - Mejoras en la relación funcionario/población atendida 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de gestión - Informes semestrales de progreso - Encuesta de opinión 	<ul style="list-style-type: none"> - Pocos datos existen (el Programa crea sistemas de generación de indicadores de gestión, y requiere informes semestrales de progreso) - Ninguno (encuesta de opinión al principio y al final del Programa)
Subcomponente 2: Desarrollo de una política criminal integral	<ul style="list-style-type: none"> - Grado de conocimiento de los representantes de las instituciones en lo penal 	<ul style="list-style-type: none"> - Encuesta de opinión 	<ul style="list-style-type: none"> - Ninguno (encuesta al principio y al final del Programa)

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES	INDICADOR DE IMPACTO	INSTRUMENTO DE MEDIDA	DATOS EXISTENTES (DATOS PRECISADOS)
<ul style="list-style-type: none"> - Actividades de capacitación - Publicación y divulgación de las recomendaciones del diagnóstico sobre el sistema penitenciario 	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento de la confianza en el Sistema de Justicia - Aplicación en la práctica del plan - Grado de conocimiento de las recomendaciones del diagnóstico sobre el sistema penitenciario - Incremento de la confianza en el Sistema de Justicia 	<ul style="list-style-type: none"> - Encuesta de opinión - Evaluación de las actividades de capacitación - Encuesta de opinión - Encuesta de opinión 	<ul style="list-style-type: none"> - Una encuesta general indica que la confianza en el sistema de justicia es: ninguna 39.7%; poca 30.8% (encuesta al principio y al final del Programa) - Ninguno (evaluación de las actividades de capacitación y encuesta al principio y al final del Programa) - Ninguno (encuesta al principio y al final del Programa) - Una encuesta general indica que la confianza en el sistema de justicia es: ninguna 39.7%; poca 30.8% (encuesta al principio y al final del Programa)
Subcomponente 3: Establecimiento de centro regional integral de justicia (proyecto piloto)	<ul style="list-style-type: none"> - Crear oportunidad de probar planeamiento integrado, y el uso de un mecanismo para proveer servicios de justicia integrados a la población - incremento del acceso a justicia y de la confianza en el Sistema de Justicia 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del funcionamiento del centro - encuesta de opinión 	<ul style="list-style-type: none"> - Ninguno (evaluación del centro está incluido en el Programa) - Encuesta de opinión
Subcomponente 4: Sistemas de Información	<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de informática reorganizadas - Bases de datos desarrollados - Sistemas implementados - Infraestructura de computo, de bases de datos y comunicaciones en funcionamiento - Personal de informática y personal usuario capacitado - Sistemas de información en operación para mejorar funciones de planeamiento y gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnósticos realizados en curso del Programa - Informes semestrales de progreso 	<ul style="list-style-type: none"> - Comparación de informes semestrales con datos básicos establecidos en diagnósticos

EL SALVADOR - PROGRAMA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA

INDICADORES CUANTITATIVOS DE PROGRESO

COMPONENTES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
COMPONENTE I: Reformas Legales				
Publicación de la nueva legislación penal	Publicación de: - 6.000 ejemplares del Código Penal - 6.000 ejemplares de Ley Penitenciaria - 1.000 ejemplares de Ley del Menor Infractor anotada - 10.000 folletos. Anuncio en 4 periódicos de ámbito nacional			
Capacitación para abogados litigantes en lo penal sobre la nueva legislación penal	8 cursos para 30 personas	8 cursos para 30 personas	8 cursos para 30 personas	8 cursos para 30 personas
Revisión de Proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos y	- Revisión realizada y recomendaciones formuladas - Análisis del impacto de la nueva ley y de su adecuación con la demás legislación en el área.			
Asistencia técnica para Asamblea Legislativa	3 talleres de 1 día para 30 legisladores			
Publicación y divulgación de la Ley de Procedimientos Administrativos	12.000 ejemplares publicados Anuncios en 4 periódicos de ámbito nacional 3 talleres de 1 día para 30 jueces y profesores de derecho	- 3 talleres de 1 día para 50 magistrados y funcionarios de la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre nueva Ley - 24 talleres de 1 día para 700 funcionarios con capacidad de tomar decisiones (56 en ministerios, 120 en instituciones oficiales autónomas y 524 en municipios) con la participación de 30 funcionarios en cada uno de ellos		
Revisión de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y ampliación a otras materias	- Revisión realizada y recomendaciones formuladas - Análisis del impacto de la nueva ley y de su adecuación con la demás legislación en el área			

ANEXO II

Página 2 de 5

COMPONENTES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
Facilitación de discusión y debate del anteproyecto de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa	- Publicación y divulgación de 1.000 ejemplares del anteproyecto de ley - 3 talleres de 1 día para 30 legisladores - Presentación del Proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa			
Publicación y divulgación de la nueva ley de Jurisdicción contenciosa administrativa		1.000 ejemplares publicados - 2 talleres de 1 día en 3 regiones para 30 jueces y profesores de derecho y 100 abogados sobre la nueva legislación		
Creación de 3 Juzgados de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo (experiencia Piloto)		- 3 juzgados creados		
Capacitación sobre la nueva legislación en materia de conciliación	- 1 curso de 5 días para 30 jueces de familia y de menores - 1 curso de 5 días para capacitar conciliadores del ISPM; 1 curso avanzado para capacitar 20 multiplicadores - 1 curso de 5 días para capacitar 30 conciliadores de la Procuraduría General y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; 1 curso avanzado de 1 día para capacitar 10 multiplicadores	- 1 curso de 2.5 días de ed. continua para conciliadores del ISPM 1 curso de 2.5 días de ed. continua para conciliadores de las Procuradurías - Implementación de cursos en conciliación y creación de 1 centro de conciliación, en una facultade de derecho.	- 1 curso de ed. continua para jueces - 1 curso de 2.5 días de ed. continua para multiplicadores del ISPM - 1 curso de 2.5 días de ed. continua para multiplicadores de la Procuraduría General y la Proc. para la Defensa de los Derechos Humanos	- 1 curso de ed. continua para conciliadores del ISPM - 1 curso de 2.5 días para conciliadores de las Procuradurías
COMPONENTE II: Mejora del Sistema de Justicia para Menores				
1. Rehabilitación de la infraestructura de los centros de menores existentes		Remodelación de un centro	Remodelación de 2 centros	
2. Establecimiento de delegaciones regionales del ISPM y construcción de centros de resguardo	Establecimiento de una delegación regionales del ISPM y construcción de un centro de resguardo en San Miguel	Establecimiento de 2 delegaciones regionales del ISPM y construcción de 2 centros de resguardo en Santa Ana y San Salvador		
3. Fortalecimiento de los programas de prevención y reinserción social		Establecimiento de capacitación para aproximadamente 1.750 menores.		

COMPONENTES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
a. Para menores en riesgo social en proceso de reeducación y para jóvenes internos en proceso de liberación	250 becas en materiales tales como mecánica automotriz reparación de máquina industriales y otras.	500 becas	500 becas	500 becas
b. Para miembros de pandillas juveniles (maras). Capacitación laboral y educación social	24 becas	48 becas	48 becas	48 becas
c. Capacitación de promotores	575 personas capacitadas	1.150 personas capacitadas	1.150 personas capacitadas	1.150 personas capacitadas
4. Apoyo a los programas de atención institucionalizada				
a. Desintoxicación de internos	2 clínicas establecidas	2 clínicas establecidas		
b. Diversificación y equipamiento de talleres de formación y producción	2 centros establecidos	3 centros establecidos		
5. Fortalecimiento de programas para prevenir y reducir la violencia familiar	1 refugio temporal en San Salvador construido			
6. Establecimiento de un fondo especial para apoyar iniciativas	5 donaciones efectuadas	5 donaciones efectuadas	5 donaciones efectuadas	5 donaciones efectuadas
7. Establecimiento de un programa de capacitación para los operadores del sistema de menores	1 coordinador de capacitación contratado			
a) Cursos introductorios para equipos multidisciplinarios del ISPM 4 ciclos de 20 horas	4 cursos	8 cursos	4 cursos	4 cursos
b) Cursos de educación continuada para equipo multidisciplinario del ISPM en 4 grupos de 30 personas en 4 ciclos de 20 horas	8 cursos	8 cursos	8 cursos	8 cursos
c) Capacitación en situ	2 cursos	4 cursos	2 cursos	
d) Elaboración de material didáctico	2 módulos y 4 videos	2 módulos y 4 videos	2 módulos y 4 videos	2 cursos

COMPONENTES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
e) Cursos para personal de apoyo de los tribunales en materia de menores (grupos de 30 personas c/u en 2 ciclos de 20 horas)		2 cursos	2 cursos	2 videos 2 cursos
Cursos para profesores de la Academia Nacional de Seguridad Pública (grupos de 30 personas en 2 ciclos de 20 horas c/u)	1 curso	2 cursos	2 cursos	2 cursos
Cursos para jueces, fiscales, procuradores y procuradores de derechos humanos (grupos de 30 personas c/u, 2 ciclos de 40 horas)		2 cursos	2 cursos	2 cursos
Grupos de 30 personas (equipos multidisciplinarios de los tribunales en materia de menores (2 ciclos de 40 horas c/u)		2 cursos	2 cursos	2 cursos
COMPONENTE III: Fortalecimiento en materia de planeamiento y sistemas de información				
Fortalecimiento de las unidades de planeación	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de la unidad de planeación del ISPM En el OJ, MOJ, PG, FG: -diseño de un sistema de indicadores de gestión para corto e mediano plazo - identificación de servicios ofrecidos y procesos de producción - elaboración de estrategias de incidencia de mediano plazo y de metas de corto plazo - diseño de un sistema de formulación y seguimiento presupuestario - evaluación de sistema de administración de RRHH - MOJ: ejecución de 356 horas de curso con asistencia de 240 participantes - PG: ejecución de 242 horas de curso con asistencia de 240 participantes - FG: ejecución de 22 horas de curso para 220 asistentes - ISPM: ejecución de 378 horas de curso para 360 asistentes 	<ul style="list-style-type: none"> - puesto en función de sistema de indicadores - diseño de nuevos servicios y reingeniería de procesos - elaboración de manuales de O & M - diseño de propuestas de política de RRHH - diseño de acciones posibles de motivación en la tarea y enriquecimiento de cargos - OJ: ejecución de 655 horas de curso para 620 asistentes 	<ul style="list-style-type: none"> - salidas periódicas de un informe para la alta gerencia - salidas periódicas de un informe estadístico, que incluya información cualitativa 	<ul style="list-style-type: none"> - salidas periódicas de un informe para la alta gerencia - salidas periódicas de un informe estadístico, que incluya información cualitativa

COMPONENTES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
Desarrollo de una política criminal integral	<ul style="list-style-type: none"> - diseño de plan de política criminal integral realizado - 3 conferencias de 1 día de información para el público en 3 regiones del país, con asistencia de 250 personas en cada una de ellas - 12 talleres de 1 día para representantes de instituciones de lo penal (50 personas cada uno de ellos) - divulgación de 1.000 folletos sobre el plan y sus recomendaciones - anuncios en 4 periódicos de ámbito nacional del plan y sus recomendaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - 24 talleres de 2 días en 3 regiones del país para capacitar funcionarios de las instituciones en lo penal (30 personas en cada uno) 		
Realización de un diagnóstico integral del sistema penitenciario	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico realizado - 3 conferencias de 1 día para el público en 3 regiones del país (250 personas en cada una de ellas) - 3 talleres de 1 día en 3 regiones del país para representantes de las instituciones involucradas (50 personas en cada uno) - publicación de 1.000 folletos sobre recomendaciones del diagnóstico - determinación de necesidades, prioridades y perspectivas de acción el área 			
Desarrollo de centros regionales integrales de justicia	<ul style="list-style-type: none"> - diseño de plan operativo - diseño de plan físico por arquitecto 	<ul style="list-style-type: none"> - construcción del centro regional integral de justicia 	<ul style="list-style-type: none"> - provisión de personal y equipos al centro; puesto en operación 	<ul style="list-style-type: none"> - evaluación del funcionamiento del centro piloto, diseño de ajustes al mismo
Desarrollo de sistemas de información	<ul style="list-style-type: none"> - formulación de plan estratégico de información - fortalecimiento institucional de unidades de informática - análisis de procesos funcionales y requerimientos de información - desarrollo de la arquitectura de la información - desarrollo de la arquitectura de sistemas - desarrollo de la arquitectura de la tecnología de la información - capacitación de personal de informática 	<ul style="list-style-type: none"> - fortalecimiento de unidades de informática - desarrollo de arquitectura de sistemas - desarrollo de arquitectura de la tecnología de la información - capacitación de personal de informática y de usuarios de los sistemas 	<ul style="list-style-type: none"> - desarrollo de arquitectura de sistemas - capacitación de personal de informática y de usuarios de los sistemas 	<ul style="list-style-type: none"> - capacitación de personal de informática y de usuarios de los sistemas

PLAN ANUAL DE TRABAJO: AÑO 1

ACTIVIDADES	TRIMESTRES			
	1	2	3	4
Contratación de personal de la Unidad Coordinadora del Programa	UTE			
Contratación de consultores para diseñar sistema de evaluación e indicadores	UTE			
Contratación de consultores para preparación de la encuesta de opinión	UTE			
COMPONENTE I: REFORMAS LEGALES				
Subcomponente 1. Apoyo a la implementación de las reformas legales en curso				
1.1 Elaboración de un plan de capacitación para abogados litigantes en lo penal que complete lo realizado en el marco del Proy. Reforma Judicial II	CNJ			
1.2 Selección, elaboración de términos de referencia y contratación de profesores (internacionales, nacionales)	CNJ			
1.3 Publicación de la nueva legislación penal: Código Penal (6.000 ejemplares). Código Procesal Penal (6.000 ejemplares) y Ley Penitenciaria (1.000 ejemplares)	MJ			
1.4 Preparación de la Ley del Menor Infractor anotada, concordada y comentada	MJ OJ			
1.5 Publicación de la Ley del Menor Infractor anotada, concordada y comentada (1.000 ejemplares)		MJ		
1.6 Elaboración y divulgación de 10.000 folletos sobre la nueva legislación penal		MJ, OJ		
1.7 Anuncios en 4 periódicos de ámbito nacional de la nueva legislación penal		MJ, OJ		
1.8 32 actividades (8 cada año) de capacitación para abogados litigantes en lo penal sobre la nueva legislación penal, con la asistencia de 30 personas divididas en 4 grupos, con un total de 480 abogados capacitados			CNJ	CNJ
Subcomponente 2. Legislación en el área administrativa				
2.1 Conformación de un grupo de trabajo con representación de todos los sectores involucrados	MJ OJ			
2.2 Revisión del Proyecto de Ley de Procedimientos administrativos y formulación de recomendaciones	MJ OJ			
2.3 Análisis del impacto de la nueva Ley y de su adecuación con la demás legislación en el área	MJ OJ			
2.4 Tres talleres de un día para unos 30 legisladores, con la finalidad de facilitar la adopción de la ley.		MJ OJ		
2.5 Publicación y divulgación de la legislación aprobada (12.000 ejemplares)			MJ	
2.6 Tres talleres de un día para la capacitación de 30 jueces y profesores de derecho sobre la nueva Ley de Procedimientos Administrativos				CNJ

ACTIVIDADES	TRIMESTRES			
	1	2	3	4
2.7 Revisión de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y ampliación a otras materias		MJ OJ		
2.8 Análisis del impacto de la nueva legislación y de su adecuación con la demás legislación en el área		MJ OJ		
2.9 Publicación y divulgación del Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (1.000 ejemplares)			MJ OJ	
2.10 Tres talleres de un día para unos 30 legisladores, con la finalidad de facilitar la adopción de la Ley			MJ OJ	
2.11 Presentación del Proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa				MJ OJ
Subcomponente 3. Aplicación de legislación en conciliación				
3.1 Capacitación en técnicas de conciliación para jueces de familia y de menores (1 cursos de 5 días para 30 jueces)			CNJ OJ	CNJ OJ
3.2 Capacitación en técnicas de conciliación para personal del ISPM: 1 cursos de 5 días para capacitar 30 conciliadores; 1 curso avanzado de 1 día adicional para capacitar 20 multiplicadores)			CNJ ISPM	CNJ ISPM
3.3 Capacitación en técnicas de conciliación para personal de la Procuraduría General y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: 2 cursos de 5 días para capacitar 30 mediadores; 1 curso de 1 día adicional para capacitar 20 multiplicadores)			CNJ PG	CNJ PG
COMPONENTE II: MEJORA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA MENORES				
Subcomponente 1: Rehabilitación de la Infraestructura de los centros de menores existentes				
1.1 Análisis técnico llevada a cabo por un equipo de arquitectos, ingenieros y otros especialistas, el cual revisará las condiciones existentes en los centros de Llobasco, El Espino, Rosa Virginia Pelletier y Tonacatepeque, así como los planes de utilización futura de los mismos			UTE ISPM	
1.2 Recomendaciones para la realización de un plan de adecuación de las estructuras actuales y construcción de nuevas estructuras			ISPM	
1.3 Autorización de la Unidad Coord. del Programa para la financiación de las construcciones en el marco del presupuesto aprobado en el préstamo (la Unidad Coord., a su vez, solicitará previamente la aprobación del Banco).				UTE ISPM
Subcomponente 2: Establecimiento de delegaciones regionales del ISPM y construcción de centros de resguardo				
2.1 Adecuación de los tres centros de resguardo y la adquisición de equipos de comunicaciones y transporte			ISPM	
2.2 Construcción del primer centro				ISPM
Subcomponente 3: Fortalecimiento de los programas de prevención y reinserción social				
3.1 Para menores en riesgo social en proceso de reeducación y para jóvenes internos en proceso de liberación:				

ACTIVIDADES	TRIMESTRES			
	1	2	3	4
a) Financiamiento de 250 becas en materias tales como mecánica automotriz, reparación de máquinas industriales y otras.			ISPM	ISPM
b) Evaluación de programa existente			ISPM	
3.2 Para miembros de pandillas juveniles (maras):				
a) Evaluación de programa existente			ISPM	
b) Capacitación laboral, elaborándose una serie de metodologías tales como cine-forum, encuentros deportivos, charlas educativas y otras actividades dirigidas a la consolidación de grupos de apoyo mutuo.			ISPM	ISPM
3.3 Capacitación de promotores:				
a) Evaluación de programa existente			ISPM	
b) Capacitación de promotores así como la adquisición del material didáctico necesario para ofrecer cursos sobre la problemática de los menores y el papel de la comunidad en su solución a los gobiernos locales, organismos comunales, madres cuidadoras y miembros de maras				ISPM
Subcomponente 4: Apoyo a los programas de atención institucionalizada				
4.1 Desintoxicación de internos:				
a) Realización de un diagnóstico para determinar el nivel de consumo de drogas de la población reclusa, con especial énfasis en el uso de materias inhalables			ISPM	
b) Con base en el mismo, el ISPM diseñará un programa de prevención y tratamiento			ISPM	
c) Apertura de dos clínicas de desintoxicación				ISPM
4.2 Diversificación y equipamiento de talleres de formación y producción:				
a) Evaluación de programa existente				ISPM
b) Establecimiento de 2 complejos de formación, que ofrecerán capacitación en diversas técnicas; mecánica automotriz, cómputo, electricidad y electrónica, costura industrial, y soldadura eléctrico-autógena				ISPM
Subcomponente 5: Fortalecimiento de programas para prevenir y reducir la violencia familiar				
5.1 Creación de un refugio temporal en San Salvador que permita ofrecer albergue a las víctimas de violencia familiar				ISPM
5.2 Adquisición de equipos de comunicación y transporte para facilitar el movimiento de las víctimas a sitios donde se les pueda brindar la atención requerida				ISPM
5.3 Capacitación y formación de equipos multidisciplinarios nuevos para poder ampliar la cobertura del programa fuera de San Salvador				ISPM
Subcomponente 6: Establecimiento de un fondo especial para apoyar iniciativas innovadoras en ONGs				
6.1 Elaboración de reglas y términos de referencia para concursos		ISPM UTE		

ACTIVIDADES	TRIMESTRES			
	1	2	3	4
6.2 Contactar a ONGs para dejarles saber de esta actividad y animar su participación		ISPM UTE		
6.3 Anunciar el concurso			ISPM UTE	
6.4 Selección de ganadores				ISPM UTE
6.5. Otorgamiento de 5 donaciones				ISPM UTE
Subcomponente 7: Programa de capacitación para los operadores del sistema de menores				
7.1 Desarrollo de plan de capacitación			ISPM	
7.2 Cursos introductorios para equipos multidisciplinarios del ISPM 4 ciclos de 20 horas			ISPM	ISPM
7.3 Cursos de educación continuada para equipo multidisciplinario del ISPM en 4 grupos de 30 personas en 4 ciclos de 20 horas			ISPM	ISPM
7.4 Capacitación en situ y elaboración de material didáctico			ISPM	ISPM
7.5 Cursos para personal de apoyo de los tribunales en materia de menores. Grupos de 30 personas c/u en 2 ciclos de 20 horas			CNJ ISPM	CNJ ISPM
7.6 Cursos para profesores de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Grupos de 30 personas en 2 ciclos de 20 horas c/u			CNJ ISPM	CNJ ISPM
7.7 Cursos para jueces, fiscales, procuradores y procuradores de derechos humanos. Grupos de 30 personas c/u, 2 ciclos de 40 horas			CNJ ISPM	CNJ ISPM
7.8 Grupos de 30 personas (equipos multidisciplinarios de los tribunales en materia de menores (2 ciclos de 40 horas c/u)			CNJ ISPM	CNJ ISPM
COMPONENTE III: FORTALEC. EN MATERIA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION				
Subcomponente 1: Fortalecimiento de Unidades de Planificación				
Selección y contratación de una firma consultora para apoyar con las siguientes actividades:	UTE			
1.1 Sistema de Indicadores de Gestión:				
a) Elaboración de términos de referencia	FG ISPM	MJ OJ	MJ PG	
b) Diagnóstico de los sistemas de información		ISPM FG	MJ,FG ISPM	MJ
c) Identificación de estadísticas disponibles		OJ	OJ,PG	PG
d) Diseño y evaluación de un set de indicadores			FG,PG ISPM	FG PG
2.1 Investigación y Desarrollo:				
a) Evaluación (cuant. y cual.) de servicios ofrecidos y procesos de producción		ISPM MJ,OJ	MJ,PG FG	FG

ACTIVIDADES	TRIMESTRES			
	1	2	3	4
b) Caracterización de necesidades de población objetivo		MJ	MJ	FG
c) Evaluación de los niveles de producción			ISPM	
d) Diseño de nuevos servicios y reingeniería de procesos		OJ	MJ,OJ PG ISPM	PG
e) Elaboración de terminos de referencia de estudios especiales			OJ	
f) Modernización y fortalecimiento del sistema documental de soporte			MOJ OJ	
g) Diseño de metodologías técnicas: - elaboración términos de referencia, contratación de consultores	CNJ	CNJ		
- implementación de recomendaciones				CNJ
1.3 Planeamiento y programación:				
a) Elaboración de términos de referencia		ISPM,FG MJ,OJ	PG	
b) Elaboración de estrategias de incidencia de mediano plazo y de metas de corto plazo		FG,MJ ISPM	PG,MJ FG,OJ ISPM	PG
c) Difusión de planes y programas			OJ, FG ISPM MJ	
d) Elaboración de manuales de organización y métodos				FG,PG
1.4 Planeamiento financiero:				
a) Elaboración de términos de referencia	FG	ISPM	PG	
b) Evaluación del sistema presupuestario		ISPM,FG	PG, FG	PG
c) Diseño o re-diseño de sistema de formulación y seg. presupuestario			ISPM FG	FG
d) Gestión de fuentes alternativas de fondos de financiamiento			ISPM	
1.5 Administración de RR HH:				
a) Elaboración de términos de referencia	FG	ISPM MJ, OJ	PG	
b) Caracterización de cargos y personal		ISPM	ISPM	
c) Evaluación del sistema de administración de RRHH		OJ, MJ FG	OJ, PG MJ, FG	PG
d) Diseño de política de RRHH			PG, OJ	FG
e) Diseño de acciones posibles de motivación				PG
1.6 Dirección:				
a) Reestructura y administración de la unidad		OJ, MJ PG, FG	MJ FG	

ACTIVIDADES	TRIMESTRES			
	1	2	3	4
b) Reinserción institucional de la unidad de planificación				OJ
c) Elaboración de plan anual de actividades		MJ, FG	OJ, PG FG, MJ	
d) Establecer estrategias de incidencia		FG	FG	
1.7 Capacitación en materia de gestión y administración:				
a) Programación de cursos		FG, PG OJ, MJ ISPM		
b) Ejecución de cursos:				
- Ministerio de Justicia: 356 horas de curso para 340 asistentes			MJ	
- Procuraduría General: 242 horas de curso, con asistencia de 240 participantes			PG	PG
- Fiscalía General: 222 horas de curso para 220 asistentes			FG	FG
- ISPM: 378 horas de curso para 360 asistentes			ISPM	ISPM
1.8 Creación de unidad de planeamiento estratégico, ISPM:				
a) Conformación de unidad		ISPM		
b) Elaboración de plan anual de actividades de la unidad		ISPM		
c) Dirigir y asesorar orientación metodológica y operativa de subunidades		ISPM	ISPM	
Subcomponente 2. Desarrollo de una política criminal integral				
2.1 Análisis de la situación actual	MJ			
2.2 Diseño de un plan de política criminal integral		MJ		
2.3 Tres conferencias/foros de un día de información para el público en general en 3 regiones del país, con la asistencia de unas 250 personas en cada una de ellas (un total de 750 personas)			MJ	
2.4 Doce talleres de un día en 3 regiones del país para representantes de las instituciones de lo penal, con la participación de unas 50 personas en cada uno de ellos (un total de 600 personas capacitadas)			MJ	MJ
2.5 Elaboración y divulgación de 1.000 folletos sobre el plan y sus recomendaciones			MJ	
2.6 Anuncios en 4 periódicos de ámbito nacional del plan y sus recomendaciones			MJ	
2.7 24 talleres de 2 días en 3 regiones del país para la capacitación de funcionarios de las instituciones en lo penal, con la participación de unas 30 personas en cada uno de ellos (un total de 720 personas capacitadas)				CNJ
2.8 Elaboración de los términos de referencia para la realización de un diagnóstico integral del sistema penitenciario	MJ			
2.9 Realización del diagnóstico		MJ		

ACTIVIDADES	TRIMESTRES			
	1	2	3	4
2.10 Tres conferencias/toros de un día de información para el público en general en 3 regiones del país, con la asistencia de unas 250 personas en cada una de ellas (un total de 750 personas)			MJ	
2.11 Tres talleres de un día en 3 regiones del país para representantes de las instituciones involucradas, con la participación de unas 50 personas en cada uno de ellos (un total de 150 personas)			MJ	
2.12 Publicación y divulgación del resumen y de las recomendaciones del diagnóstico (1.000 folletos)			MJ	
2.13 Anuncios en 4 periódicos de ámbito nacional del resumen y de las recomendaciones del diagnóstico			MJ	
2.14 Determinación de necesidades, prioridades y perspectivas de acción en el área				MJ
Subcomponente 3: Desarrollo de centros regionales integrales de justicia				
3.1 Diseño de plan operativo		OJ, FG PG		
3.2 Contratación de arquitecto; diseño de plan físico				OJ, FG PG
Subcomponente 4: Desarrollo de sistemas de información				
Contratación de una firma consultora para las actividades siguientes:		UTE		
4.1 Formulación de un plan estratégico de información	CCII			
4.2 Fortalecimiento institucional de unidades de informática	CCII ECE	CCII ESE		
4.3 Análisis de procesos funcionales y requerimientos de información		CCII y ECE		
4.4 Desarrollo de la arquitectura de la información		CCII y ECE	CCII y ECE	
4.5 Desarrollo de la arquitectura de sistemas			CCII y ECE	CCII y ECE
4.6 Desarrollo de la arquitectura de la tecnología de la información			CCII y ECE	CCII y ECE
4.7 Capacitación de personal de informática y de usuarios de los sistemas		CCII y ECE	CCII y ECE	

PROYECTO DE RESOLUCION

EL SALVADOR. PRESTAMO No. ____/OC-ES A LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
(Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de El Salvador, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$19.200.000 o su equivalente en otras monedas, excepto la de la República de El Salvador, que formen parte de los recursos del capital ordinario del Banco, y se sujetará a las "Condiciones Contractuales Especiales" y a los "Plazos y Condiciones Financieras" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.

PROYECTO DE RESOLUCION

EL SALVADOR. PRESTAMO No. ____/OC-ES A LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
(Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de El Salvador, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$3.000.000 o su equivalente en otras monedas, excepto la de la República de El Salvador, que formen parte de los recursos del capital ordinario del Banco, y se sujetará a las "Condiciones Contractuales Especiales" y a los "Plazos y Condiciones Financieras" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.

PROYECTO DE RESOLUCION

EL SALVADOR. PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL PRESTAMO No. ___/OC-ES A
LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
(Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe para que en nombre y representación del Banco, en su carácter de administrador de la Cuenta de la Facilidad de Financiamiento Intermedio, en adelante la "cuenta", proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de El Salvador, como Prestatario, y a adoptar las demás medidas pertinentes para utilizar recursos de la cuenta con el objeto de pagar una parte de los intereses adeudados por el Prestatario sobre los saldos deudores del préstamo autorizado por la Resolución DE- /96, para financiar parte del costo del Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia, en adelante el "préstamo aprobado". Dicha parte representará hasta el 5% por año, sobre los saldos deudores del préstamo.

2. Disponer que el Banco cargará a la cuenta las sumas adeudadas por el Prestatario y pagaderas por la cuenta, en las monedas designadas por el Banco y que estén disponibles en la cuenta, en las fechas previstas para el pago de los intereses o en la fecha o fechas en que el Banco reciba el pago del remanente de intereses adeudados por el Prestatario, en adelante el "remanente". Si el Prestatario no pagase en la fecha prevista el remanente, así como cualquier otra suma que adeude por concepto de amortización o comisiones, el Banco retendrá el pago del monto de intereses autorizado para ser pagado al Banco con cargo a la cuenta. En este evento, el Prestatario continuará obligado por el monto total de los intereses vencidos y adeudados, hasta que el Banco haya recibido el pago del remanente y de las respectivas sumas debidas por concepto de amortización y comisiones.

3. Establecer que, en la medida en que el Banco reciba pagos de la cuenta por concepto de intereses del préstamo aprobado, el Prestatario quedará liberado de su responsabilidad de hacer efectivos dichos pagos y, consecuentemente, que el mismo no estará obligado a reembolsar al Banco suma alguna por concepto de los intereses pagados al Banco con cargo a la cuenta.

4. Establecer que cuando el Prestatario decida disponer el pago del monto total de los intereses que devenguen los saldos deudores del préstamo aprobado ya sea durante toda la vigencia del préstamo o solamente durante el período de amortización del mismo, el Banco procederá, en ambos casos, a reembolsar al Prestatario, a la brevedad posible, los intereses que éste hubiere pagado y que

corresponda cargar a la cuenta de acuerdo con lo dispuesto en las Cláusulas 1 y 2 anteriores.

5. Reiterar que en la medida en que el Banco determine que no existen suficientes recursos disponibles en la cuenta para efectuar los pagos a que se refieren las Cláusulas 2 y 4 anteriores, corresponde al Prestatario pagar los intereses adeudados, en las fechas y sobre los montos que se especifiquen en el contrato de préstamo, hasta el monto total devengado sobre los saldos deudores, sin obligación de reembolso por parte del Banco.